Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión **02128/INFOEM/IP/RR/2023**, interpuesto por **XXX XXX**, en lo sucesivo, el **RECURRENTE**; en contra de la respuesta del **Ayuntamiento de Almoloya de Juárez**, en adelante el **SUJETO OBLIGADO**,se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

# **ANTECEDENTES**

1. El **catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés**, se presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), la solicitud de información pública registrada con el número **00046/ALMOJU/IP/2023,** mediante la cual se requirió lo siguiente:

*“Respecto al día 8 de marzo del año en curso la información siguiente: 1) Relación de denuncias anónimas realizadas al número de emergencia municipal en la que se especifique: ubicación y descripción del hecho que se reporta. 2) Relación de llamadas en versión pública a los números de seguridad pública especificados en el portal de internet del Ayuntamiento siguientes: 7251361348 y 7251361980, en la que se identifique: ubicación y descripción del hecho que se reporta. 3) Bitácora de servicio de la patrulla de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal con número 093. 4) Elementos de seguridad pública municipal que hicieron uso en la fecha especificada de la patrulla de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal con número 093 y diligencias practicadas. 5) Parte de novedades. 6) Relación de puestas a disposición ante el MP en turno de Zinacantepec por motivo de la detención. 7) Informe Policial Homologado. Adicionalmente: 8) Manual de Organización y Manuales de Procedimientos de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal. 9) En caso de existir, Protocolos de actuación en materia de seguridad pública ante llamadas de emergencia. 10) Código de Ética y Código de Conducta de los servidores públicos del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez. 11) Integración del Sistema Municipal Anticorrupción de Almoloya de Juárez y mecanismos para la presentación de denuncias. 12) ¿Cómo se integra la Comisión de Honor y Justicia? 13) Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia 14) Copia de las actas derivadas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Honor y Justicia de Enero 2022 a la fecha de la presente solicitud.” (Sic)*

1. Se hace constar que el entonces **SOLICITANTE** señaló como modalidad de entrega de la información**: A través del SAIMEX**.
2. El **doce (12) de abril de dos mil veintitrés**, el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta a la solicitud de información, en los siguientes términos:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Con fundamento en los artículos 4, 12 y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se adjunta al presente la respuesta emitida por las áreas de Contraloría Municipal, Dirección Jurídica y Consultiva y Dirección de Seguridad Ciudadana, para estar en posibilidad de cumplir con el requerimiento interpuesto por el solicitante”* (Sic)

1. En acompañamiento del acuse de respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** presentó los archivos electrónicos cuyo título y contenido se resume a continuación:
	1. ***“OFICIO RELACION DE INCIDENCIAS.pdf”***: Documento de tres fojas consistente en el oficio número MAJ/DSCM/AVG/767/2023, de veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Director de Seguridad Ciudadana Municipal, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, por el que manifiesta la necesidad de clasificar, por reserva, los puntos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de la solicitud de información; manifiesta la inexistencia de la información solicitada en el punto 2; señala que los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran en proceso de aprobación; y, manifiesta proporcionar el protocolo de actuación de llamadas de emergencia.
	2. ***“sol 4606302420230412144325.pdf”***: Documento de 10 fojas consistente en los siguientes documentos:
		1. Oficio número MAJ/CM/0233/2023, de diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la Contralora Municipal, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, por el que señala una dirección *web* donde consultar el Código de Ética; e, informa sobre la conformación del Sistema Municipal Anticorrupción y su mecanismo de denuncia.
		2. Oficio número PMAJ/DJYC/TPFV/204/2023, de veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la Directora Jurídica y Consultiva, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, por el que informa la manera en que se conforma el Comité de Honor y Justicia Municipal; enlista la normatividad que resulta aplicable a los elementos de seguridad; y, restringe el acceso a las Actas de la Comisión de Honor y Justicia pues, a su dicho, actualizan una causal de reserva de la información.
		3. Oficio número OM/DJTC/TPFV/207/2023, de veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la Directora Jurídica y Consultiva y Secretaria Técnica Ejecutiva de la Comisión de Honor y Justicia, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, por el que restringe el acceso a las Actas de la Comisión de Honor y Justicia pues, a su dicho, actualizan una causal de reserva de la información.
	3. ***“PROTOCOLO 9.1.1.pdf”***: Documento de una foja consistente en el Protocolo de Seguimiento a la Atención de Reportes del 9-1-1, del Centro de Mando Municipal.
	4. ***“PRUEBA DE DAÑO INCID. DELIC..pdf”***: Documento de cinco fojas consistente en el oficio número PM/DSCM/AVG/781/2023, de veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Director de Seguridad Ciudadana Municipal, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, por el que manifiesta la necesidad de clasificar, como reservada, la información referente a los registros de denuncias, llamadas anónimas, bitácoras de servicio, elementos de seguridad pública, partes de novedades, relación de puestas a disposición del Ministerio Público e Informe Policial Homologado.
2. Derivado de la respuesta emitida por el **SUJETO OBLIGADO**, el **veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés**, el particular interpuso el recurso de revisión **02128/INFOEM/IP/RR/2023;** impugnación en la que refirió lo siguiente:

**Acto impugnado:**

*“La clasificación de la información solicitada como reservada y la declaratoria de inexistencia de la información.” (Sic)*

**Razones o motivos de inconformidad:**

*“El sujeto obligado niega el acceso a la información argumentando que encuadra en los supuestos de información reservada, no obstante que no acompaña en su respuesta, la ratificación del Comité de Transparencia. Respecto al punto 2 de la solicitud refiere la inexistencia señalando que no se cuenta con una base de datos, cuando dicha información puede formar parte del Informe Policial Homologado, o bien, en su Protocolo de Seguimiento a Reportes, señala en el numeral 4 que se envía una ficha de avanzada, con lo cual se presume la existencia de la información.”* (Sic)

1. Se registró el recurso de revisión bajo el número de expediente al rubro indicado, asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se turnó a la **Comisionada María del Rosario Mejía Ayala**, con el objeto de su análisis.
2. La Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a través del acuerdo de admisión de **veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés**, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía **SAIMEX** a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a su derecho convinieran, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda a los casos concretos, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentara el informe justificado procedente.
3. De las constancias que obran dentro del expediente digital formado en el SAIMEX, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** no presentó su informe justificado para confirmar, modificar o revocar su respuesta original; en el mismo sentido, el **RECURRENTE** omitió el presentar cualquier tipo de alegatos o manifestaciones. Se adjunta la captura del apartado de *Manifestaciones* como referencia:



1. El **diez (10) de diciembre de dos mil veintidós**, con fundamento en el artículo 181, tercer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se notificó que el plazo de treinta días para resolver el recurso de revisión sería ampliado por un periodo de quince días hábiles adicionales.
2. Este Organismo Garante no pasa por alto explicar que, la dilación en la resolución del presente asunto encuentra justificación en que el alto número de recursos de revisión recibidos ha incrementado el número de medios de impugnación que deben resolverse por este Instituto; circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
3. Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
4. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
5. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
6. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
7. **Complejidad del Asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
8. **Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.
9. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
10. **La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.
11. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
12. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“****TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO****.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
13. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
14. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

***PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.*** *“A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos.”[[1]](#footnote-1)*

***PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.*** *“En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto.”[[2]](#footnote-2)*

1. Por ello, este Organismo Garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso de plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
2. El **catorce (14) de agosto de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente decretó el cierre del periodo de instrucción, por lo que ordenó turnar el expediente para su resolución, misma que ahora se pronuncia. y ----------------------------------------

# **C O N S I D E R A N D O**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del SAIMEXen el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de 15 días hábiles otorgados; de tal modo que, si el **SUJETO OBLIGADO** entregó respuesta el **doce (12) de abril de dos mil veintitrés**, el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del **trece (13) de abril** al **cuatro (04) de mayo de dos mil veintitrés**; sin contemplar en el cómputo los sábados, domingos y días inhábiles, en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. Luego entonces, si el hoy **RECURRENTE** presentó su inconformidad el **veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés**, éste se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
3. Por otro lado, de la revisión al expediente electrónico contenido en el SAIMEX, se desprende que la parte solicitante, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública en el expediente que se revisa, tanto en la solicitud de información como en el recurso de revisión, **no señaló su nombre completo, ni se tiene certeza de su identidad**; sin embargo, es importante señalar que el nombre de los Solicitantes y Recurrentes no es un requisito indispensable para la tramitación del acto procesal específico en materia de acceso a la información, ello en estricto apego al numeral 155 párrafo tercero de la Ley de la materia, en concatenación con el 180 del mismo ordenamiento.
4. Esto es así, ya que de conformidad con los artículos 6, apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo, fracciones III, IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos, además de que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la Constitución Federal y Local.
5. Por lo cual, de una interpretación sistemática, armónica y progresiva del derecho humano de acceso a la información pública se aprecia que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho derecho fundamental exime a quien lo ejerce, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que inclusive, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima o no contener un nombre que identifique al Solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad.
6. Así mismo, como lo establece la Convención Americana, en su artículo 13, el derecho de acceso a la información es un derecho humano universal y, en consecuencia, toda persona tiene derecho a solicitar acceso a la información.
7. De igual forma, la Corte Interamericana ha precisado que no es necesario acreditar un interés directo ni una afectación personal para obtener la información en poder del Estado, excepto en los casos en que se aplique una legítima restricción permitida por la Convención Americana.
8. Por lo tanto, el nombre del **SOLICITANTE** y subsecuente **RECURRENTE** no puede ser considerado un requisito indispensable de procedencia del recurso de revisión que nos ocupa, ya que el acceso a la información no está condicionado a acreditar algún interés ya sea jurídico o legítimo, máxime que es un elemento subsanable por este Órgano Garante.
9. Consecuencia de lo anterior, este Órgano Garante advierte que el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

## **TERCERO. Del planteamiento de la *Litis*.**

1. Del ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés, se requirió la relación de denuncias realizadas a los números de emergencia municipal; la bitácora de servicio de una patrulla específica y el nombre de los policías asignados al vehículo; parte de novedades; relación de puestas a disposición al Ministerio Público; e, Informe Policial Homologado.
2. Así mismo, se requirieron los Manuales de Organización y Procedimientos de la Dirección de Seguridad Ciudadana; protocolos de actuación a llamadas de emergencia; Códigos de Ética y Conducta de los servidores públicos del ayuntamiento; integración del Sistema Municipal Anticorrupción y mecanismo para la presentación de denuncias; integración de la Comisión de Honor y Justicia y su Reglamento, así como las Actas de Sesiones generadas desde el uno (01) de enero de dos mil veintidós a la fecha de la presentación de la solicitud.
3. El **SUJETO OBLIGADO** restringió el acceso a la información relacionada con las denuncias realizadas a los números de emergencia municipal, la bitácora de servicio de una patrulla específica y el nombre de los policías asignados al vehículo, parte de novedades, relación de puestas a disposición al Ministerio Público y, el Informe Policial Homologado por actualizarse una causal de reserva de la información.
4. Por otro lado, informó que los manuales de organización y procedimientos de la Dirección de Seguridad Ciudadana se encontraban en proceso de aprobación; entregó un protocolo de actuación de llamadas de emergencia; señaló una dirección *web* donde consultar el Código de Ética; y, se pronunció sobre la conformación y reglamento de la Comisión de Honor y Justicia.
5. El **RECURRENTE** impugnó la respuesta mediante recurso de revisión, en el que señaló por agravios, la clasificación de la información y, la declaratoria de inexistencia.
6. Por lo anterior, la *Litis* a resolver en el presente recurso se circunscribe en determinar si la orientación del **SUJETO OBLIGADO** colma el derecho de acceso a la información ejercido por el **RECURRENTE**; o, si por el contrario, se actualizan las causales de procedencia del recurso de revisión establecidas en el artículo 179 fracción I, V y/o VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios[[3]](#footnote-3).

## **CUARTO. Estudio y Resolución del asunto.**

### I. Del deber de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de acceso a la información pública.

1. Es menester precisar que este Órgano Garante parte del hecho que el Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Particular del Estado de México, por lo que al respecto el **SUJETO OBLIGADO** debe ser cuidadoso del debido cumplimiento de las obligaciones constitucionales que se le imponen; en consecuencia, a todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, según lo dispone el tercer párrafo del artículo primero de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, tienenla obligación de “promover, **respetar**, proteger y **garantizar** los derechos humanos”, entre los cuales se encuentra dicho derecho.
2. Por lo anterior, se deduce que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano convencional y constitucionalmente reconocido; en consecuencia, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, funciones y atribuciones tienen la obligación de respetarlo, protegerlo y garantizarlo.
3. Así las cosas, podemos definir el Derecho de Acceso a la Información Pública como: *La igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información[[4]](#footnote-4)en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,[[5]](#footnote-5)*que se constituye como una herramienta fundamental para ejercer *el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas,[[6]](#footnote-6)* fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública,[[7]](#footnote-7)*que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.*
4. Por otro lado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, cuyo objeto es establecer principios, bases generales y procedimientos para tutelar y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados; en su artículo 176 establece que el recurso de revisión es la garantía secundaria mediante la cual se pretende reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública, siendo éste el medio a través del cual, este Órgano Garante después de realizar el análisis al procedimiento de acceso a la información, podrá determinar la posible afectación y, de ser el caso, ordenar la reparación a la violación del derecho en cuestión.

### II. De la atención a la solicitud de información.

1. Una vez expuesto lo anterior, de la lectura a la solicitud de información **00046/ALMOJU/IP/2023**, y como fuera señalado en el Planteamiento de la *Litis* de esta resolución, se advierte que el Particular requirió, al Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, acceder a la siguiente información generada el **ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés**:
	1. Información relacionada con llamadas de emergencia:
		1. Relación de denuncias anónimas, realizadas al número de emergencia municipal, donde se especifique la ubicación y hecho que se reporta.
		2. Relación de llamadas realizadas a los números de seguridad pública señalados en el portal oficial del ayuntamiento, donde se especifique la ubicación y hecho que se reporta.
	2. De la patrulla de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, con número 093:
		1. Bitácora de servicio.
		2. Elementos de seguridad pública municipal que hicieron uso de ésta y diligencias practicadas.
		3. Parte de novedades.
	3. Relación de puestas a disposición ante el Ministerio Público en turno donde se señale el motivo de detención.
	4. Informe Policial Homologado.
2. Adicionalmente, el entonces **SOLICITANTE** requirió acceder a la siguiente información:
	1. Manuales de Organización y Procedimientos de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal;
	2. Protocolos de actuación, en materia de seguridad pública, ante llamadas de emergencia;
	3. Códigos de Ética y Conducta de los servidores públicos del ayuntamiento;
	4. Integración del Sistema Municipal Anticorrupción y, mecanismos para presentar denuncias; y
	5. De la Comisión de Honor y Justicia:
		1. Integración;
		2. Reglamento; y
		3. Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, desde el uno (01) de enero de dos mil veintidós al catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés.
3. En respuesta a la solicitud, el **SUJETO OBLIGADO** entregó el oficio número MAJ/DSCM/AVG/767/2023, de veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Director de Seguridad Ciudadana Municipal, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido elemental se transcribe a continuación:

*“****En relación a los puntos 1, 3, 4, 5, 6 y 7****, solicito* ***se someta a consideración del Comité de Transparencia la clasificación de la información considerada como reservada****, (…) con fundamento en el artículo 140 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México (…)*

*(…)*

***Por lo que confiere al punto 2*** *(…), se declara la inexistencia de la información, toda vez que a la fecha no se cuenta con una base de datos.*

*En ese sentido y en virtud de que, la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, actualmente no cuenta con una base de datos (…),* ***solicito se someta a consideración del Comité de Transparencia la inexistencia de la información referente****.*

***Con relación al punto 8:***

*(…)*

*Hago de su conocimiento que* ***el Manual de Organización y Manual de Procedimientos*** *de esta Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal,* ***se encuentran para aprobación****, visto bueno y publicación en las oficinas que representa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica.*

*(…)*

***Con relación al punto 9:***

*(…)*

***En relación a los Protocolos de actuación de llamadas de emergencia hago de su conocimiento, que se proporciona la información en formato PDF****, Con fundamento en el artículo 25 de la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación Para la Seguridad Pública del Estado de México.*

*Resulta importante precisar que esta Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal,* ***en cuanto a los puntos 10, 11, 12, 13 y 14, no cuanta con la información que le pudiera ser proporcionada en atención a su requerimiento****; esto en virtud de que dicha información no corresponde a las atribuciones que son competencia de esta Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, permitiéndome solicitarle a efecto de estimarlo conveniente, dicha información sea requerida en las áreas correspondientes del Ayuntamiento Municipal de Almoloya de Juárez.”* (Sic)

(Énfasis añadido)

1. Así mismo, presentó el oficio número MAJ/CM/0233/2023, de diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés, emitida por la Contralora Municipal, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, por el que informó lo siguiente:

*“Por cuanto hace al código de ética informo a usted que este se encuentra publicado en la siguiente dirección electrónica:*

*https://almoloyadejuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2022/contraloría/C%C3%93DIGO%20DE%%20%C3%89TICA.pdf*

*En cuanto a la integración del Sistema Municipal Anticorrupción de Almoloya de Juárez le informo que se encuentra integrado por un Comité de Participación Ciudadana y un Comité Coordinador de conformidad con lo establecido en los artículo 62 y 63 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.*

*Los mecanismos para la presentación de denuncias son a través de comparecencia personal, escrito de denuncia o vía el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)”* (Sic.)

1. Por su parte, también se hizo entrega del oficio número PMAJ/DJYC/TPFV/204/2023, de veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés, de la Directora Jurídica y Consultiva, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyas manifestaciones principales se vierten a continuación:

*“(…) me permito hacerle de su conocimiento que respecto a los numérales* ***1-12*** *dentro mis facultades no puedo otorgar dicha información, en consecuencia, el área encargada será la Dirección de Seguridad Ciudadana; ahora bien, en lo que corresponde a los numerales* ***12, 13, 14*** *me permito exponer lo siguiente;*

***12) ¿Cómo se integra la Comisión de Honor y Justicia?***

***R.*** *Con fundamento en el artículo* ***130*** *del Bando Municipal (…)*

*(…)*

***13) Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia.***

***R.*** *(…) la Comisión de Honor y Justicia de Almoloya de Juárez, México se rige bajo la normatividad de diversas legislaciones aplicables a los Elementos de Seguridad, las cuales son las siguientes;*

*I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;*

*II. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;*

*III. La Ley de Seguridad del Estado de México; y*

*IV. La Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha 16 de mayo del 2018.*

***14) Copia de las Actas derivadas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Honor y Justicia de enero de 2022 a la fecha de la presente solicitud.***

*(…) no es posible entregarle las copias requeridas en su oficio descrito con antelación.”* (Sic.)

1. Así mismo, se entregó el oficio número PM/DJYC/TPFV/207/2023, de la Directora Jurídica y Consultiva y Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Honor y Justicia, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, por el que manifestó lo siguiente:

*“En consecuencia, le hago de su conocimiento que respecto a los numérales 1-12 dentro de mis facultades no puedo otorgar dicha información, en consecuencia, el área encargada será la Dirección de Seguridad Ciudadana; ahora bien, en lo que corresponde a los numerales 14 me permito exponer lo siguiente:*

*Con fundamento en el artículo 59 fracción I, II y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.*

*Respecto de la Solicitud de mérito, es dable señalar que la COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, advierte que lo solicitado se someta a consideración del Comité la reserva de dicha información, en virtud de hacer pública dicha información podría ocasionar un perjuicio general de que se difunda; para lo cual, se presenta y aplica una* ***PRUEBA DE DAÑO****, entendiéndose por esta, la demostración de manera fundada y motivada, que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y que el menoscabo o daño que puede producir con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla y por consiguiente, debe clasificarse como reservada, precisando las razones objetivas por las que la apertura de la información genera una afectación.*

*(…)”*

1. Finalmente, se entregó el oficio número PM/DSCM/AVG/781/2023, de veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés, del Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, por el que refirió lo siguiente:

*“Respecto de la Solicitud de mérito, es dable señalar que la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL, advierte que lo solicitado versa en información referente al rubro, por lo cual se someta a consideración del Comité la reserva de dicha información, en virtud de hacer pública dicha información podría ocasionar un perjuicio real y directo a interés público, además de poner riesgo de perjuicio que supondría la divulgación superar el interés público general de que se difunda; para lo cual, se presenta y aplica una* ***PRUEBA DE DAÑO****, entendiéndose por esta, la demostración de manera fundada y motivada, que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y que el menoscabo o daño que puede producir con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla y por consiguiente, debe clasificarse como reservada, precisando las razones objetivas por las que la apertura de la información genera una afectación.*

*(…)*

*MOTIVACIÓN*

*LA* ***DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL*** *del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que nos ocupa, solicita clasificar como reservada a la información relativa al contenido de la documentación generada por la misma, en el periodo comprendido a la fecha.*

*(…)”*

1. Por otro lado, se hace constar que el **SUJETO OBLIGADO** entregó el Protocolo de Seguimiento a la Atención de Reportes del 9-1-1, del Centro de Mando de Almoloya de Juárez.
2. El particular impugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, mediante el recurso de revisión con número indicado al rubro y, en el que señaló por agravios, los siguiente:
	1. La clasificación de la información;
	2. La declaratoria de inexistencia referida para el requerimiento dos, pues dicha información puede formar parte del Informe Policial Homologado, o bien, en su Protocolo de Seguimiento a Reportes; y
	3. Que para el requerimiento cuatro se señaló una ficha de avanzada, con lo cual, se presume la existencia de la información.
3. Con lo antes expuesto, podemos elaborar una tabla comparativa que relacione los diversos requerimientos, expuestos por el particular, con la información proveída por el **SUJETO OBLIGADO**, misma que se muestra a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN****SOLICITADA** | **RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO** | **¿SE COLMA EL REQUERIMEINTO?** |
| Del ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés: | Sobre llamadas de emergencia: | Relación de denuncias anónimas, realizadas al número de emergencia municipal, donde se especifique la ubicación y hecho que se reporta. | El Director de Seguridad Ciudadana Municipal solicitó la reserva de la información. | **PARCIALMENTE** |
| Relación de llamadas realizadas a los números de seguridad pública señalados en el portal oficial del ayuntamiento, donde se especifique la ubicación y hecho que se reporta. | El Director de Seguridad Ciudadana Municipal declaró la inexistencia de la información. | **NO** |
| De la patrulla de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, con número 093: | Bitácora de servicio. | El Director de Seguridad Ciudadana Municipal solicitó la reserva de la información. | **PARCIALMENTE** |
| Elementos de seguridad pública municipal que hicieron uso de ésta y diligencias practicadas. | El Director de Seguridad Ciudadana Municipal solicitó la reserva de la información. | **NO** |
| Parte de novedades. | El Director de Seguridad Ciudadana Municipal solicitó la reserva de la información. | **PARCIALMENTE** |
| Relación de puestas a disposición ante el Ministerio Público en turno donde se señale el motivo de detención. | El Director de Seguridad Ciudadana Municipal solicitó la reserva de la información. | **PARCIALMENTE** |
| Informe Policial Homologado. | El Director de Seguridad Ciudadana Municipal solicitó la reserva de la información. | **PARCIALMENTE** |
| Manuales de Organización y Procedimientos de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal. | El Director de Seguridad Ciudadana Municipal informó que se encontraban para aprobación, visto bueno y publicación por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | **SÍ****(ACTOS CONSENTIDOS)** |
| Protocolos de actuación, en materia de seguridad pública, ante llamadas de emergencia. | El Director de Seguridad Ciudadana Municipal entregó el *Protocolo de Seguimiento a la Atención de Reportes del 9-1-1.* | **SÍ****(ACTOS CONSENTIDOS)** |
| Códigos de Ética y Conducta de los servidores públicos del ayuntamiento. | La Contralora Municipal señaló una dirección *web* donde consultar el Código de Ética. | **SÍ****(ACTOS CONSENTIDOS)** |
| Integración del Sistema Municipal Anticorrupción y, mecanismos para presentar denuncias. | La Contralora Municipal informó que éste se integra conforme a lo establecido por los artículos 62 y 63 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México; y, que los mecanismos de denuncia son mediante comparecencia personal, escrito o a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM). | **SÍ****(ACTOS CONSENTIDOS)** |
| De la Comisión de Honor y Justicia: | Integración. | La Directora Jurídica y Consultiva refirió que la Comisión se integraba con base en lo establecido en el artículo 130 del Bando Municipal de Almoloya de Juárez. | **SÍ****(ACTOS CONSENTIDOS)** |
| Reglamento. | La Directora Jurídica y Consultiva señaló que la Comisión se regía bajo la legislación aplicable para los elementos de seguridad, con base en la Constitución Federal, la Ley General del Sistema de Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Estatal y, la Gaceta del Gobierno de 16 de mayo de 2018. | **SÍ****(ACTOS CONSENTIDOS)** |
| Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, desde el uno (01) de enero de dos mil veintidós al catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés. | La Directora Jurídica y Consultiva restringió su acceso derivado de que, a su dicho, se actualizaba una causal de reserva de la información. | **PARCIALMENTE** |

1. Como puede apreciarse, el **particular no mostró inconformidad por las respuestas proveídas a los requerimientos relacionados con los manuales de organización y procedimientos de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal; los protocolos de actuación, en materia de seguridad pública, para atender llamadas de emergencia; los códigos de ética y conducta de los servidores públicos del ayuntamiento; la integración del Sistema Municipal Anticorrupción y, los mecanismos para presentar denuncias; y, de la Comisión de Honor y Justicia, su integración y reglamento**; por ende, dichos rubros deben declararse **atendidos**, pues se entiende que el **RECURRENTE** está conforme con la información entregada al no contravenir la misma. Sirve de Apoyo a lo anterior, por analogía la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.*** *Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

1. Consecuentemente, se reitera, que la parte de la respuesta que no fue impugnada debe declararse consentida por la parte **RECURRENTE**, toda vez que no se realizaron manifestaciones de inconformidad, por lo que no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado ya que se infiere un consentimiento ante la falta de impugnación eficaz.
2. Sirve de sustento a lo anterior por analogía la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *“Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

1. Establecido lo anterior, se procede a analizar el marco legal que circunda a la información solicitada, así como la procedencia de la clasificación y, de la inexistencia, manifestada por el **SUJETO OBLIGADO**.

### III. De la seguridad pública.

1. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que **la seguridad pública es una función del Estado a cargo de** la Federación, las entidades federativas y **los Municipios**, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
2. Al respecto, la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley[[8]](#footnote-8). Así mismo, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos[[9]](#footnote-9).
3. En seguimiento al mandato constitucional antes referido, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública; y, tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como **establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre** la Federación, las entidades federativas y **los Municipios**, en esta materia.
4. Ahora bien, en alusión a los requerimientos formulados por el **RECURRENTE**, resulta oportuno traer a colación los artículos 5, fracción II, XVII, 7, fracción IX, 19, fracción I, 39, inciso b), fracción VI y XI, 118 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como, el artículo 125, fracción VIII y 142 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México:

***LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA***

*“****Artículo 5.-*** *Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:*

*(…)*

***II. Bases de Datos:*** *Las bases de datos que constituyen subconjuntos sistematizados de la información contenida en Registros Nacionales en materias relativas a detenciones, armamento, equipo y personal de seguridad pública, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, así como las bases de datos del Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno relativas a la información criminalística, huellas dactilares de personas sujetas a un proceso o investigación penal, teléfonos celulares, personas sentenciadas y servicios de seguridad privada, así como las demás necesarias para la prevención, investigación y persecución de los delitos. El conjunto de bases de datos conformará el Sistema Nacional de Información;*

*(…)*

***XVII. Sistema Nacional de Información:*** *al Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, el cual constituye el conjunto integrado, organizado y sistematizado de las Bases de Datos. Está integrado por elementos metodológicos y procedimentales que permiten a las Instituciones de Seguridad Pública su consulta e interconexión para el desempeño de sus funciones.*

*(…)”*

*“****Artículo 7.-*** *Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:*

*(…)*

***IX.*** *Generar, compartir, intercambiar, ingresar, almacenar y proveer información, archivos y contenidos a las Bases de Datos que integran el Sistema Nacional de Información, de conformidad con lo dispuesto en la legislación en la materia.*

*Tratándose de manejo de datos que provengan del Registro Nacional de Detenciones se atendrá a lo dispuesto en la Ley Nacional del Registro de Detenciones;*

*(…)”*

***Artículo 19.-*** *El Centro Nacional de Información será el responsable de regular el Sistema Nacional de Información y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:*

***I.*** *Determinar los criterios técnicos y de homologación de las Bases de Datos que conforman el Sistema Nacional de Información;*

*(…)”*

***Artículo 39.-*** *La concurrencia de facultades entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:*

*(…)*

***B.*** *Corresponde a la Federación, a las entidades federativas y a los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:*

*(…)*

***VI.*** *Designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la información a que se refiere esta Ley;*

*(…)*

***XI.*** *Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo Policial para el registro y seguimiento en el Sistema Nacional de Información;*

*(…)”*

*“****Artículo 118.- Las Bases de Datos que integran el Sistema Nacional de Información se actualizarán permanentemente y serán de consulta obligatoria para garantizar la efectividad en las actividades de Seguridad Pública.***

***Las Bases de Datos criminalísticas se conformarán de la información que aporten las instituciones de procuración de justicia y del sistema penitenciario, relativa a las investigaciones, órdenes de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de penas.***

*El Registro Nacional de Detenciones se vinculará con las Bases de Datos a que se refiere el presente artículo, mediante el número de identificación al que hace referencia la ley de la materia.”*

***LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO***

***“Artículo 125.-*** *Los municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, considerándose enunciativa y no limitativamente, los siguientes:*

*(…)*

***VIII.*** *Seguridad pública y tránsito;*

*(…)”*

*“****Artículo 142.-*** *Las funciones de seguridad pública del municipio en su respectivo ámbito de competencia, estarán a cargo de un Director de Seguridad Pública Municipal o su equivalente, el cual deberá ser nombrado en los términos y requisitos establecidos en la Ley de Seguridad del Estado de México.*

 *En cada municipio se deberán integrar cuerpos de seguridad pública, de bomberos y, en su caso, de tránsito, estos servidores públicos preferentemente serán vecinos del municipio, de los cuales el presidente municipal será el jefe inmediato”*

1. En este sentido, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé un esquema de distribución de competencias entre la Federación, los Estados y los **Municipios**. Destacando, con relación a estos últimos, la integración y actualización de diversas **Bases de Datos**. Luego entonces, es óbice mencionar que la información requerida estriba dentro de las fronteras conceptuales del interés general y el alcance público; robustece lo anterior los artículos 24, fracción XII y 92, fracción XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, normatividad invocada cuyo contenido literal es el siguiente:

 *“****Artículo 24.*** *Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:*

*(…)*

***XII.*** *Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones generales de transparencia previstas en la presente Ley o determinadas así por el Instituto, y en general aquella que sea de interés público;*

*(…)”*

***“Artículo 92.*** *Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*(…)*

***XXXIV.*** *Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;*

*(…)”*

1. Correlativo a lo anterior, el Criterio 11/09 emitido por el hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; refiere lo siguiente:

***LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ES DE NATURALEZA PÚBLICA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA CON LA QUE SE ENCUENTRE VINCULADA****. “Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información estadística es de naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los datos estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que pudieran llegar a justificar su clasificación.*

*Expedientes:*

*• 2593/07 Procuraduría General de la República – Alonso Gómez-Robledo V.*

*• 4333/08 Procuraduría General de la República – Alonso Lujambio Irazábal*

*• 2280/08 Policía Federal – Jacqueline Peschard Mariscal*

*• 3151/09 Secretaría de Seguridad Pública – María Marván Laborde*

* *0547/09 Procuraduría General de la República – Juan Pablo Guerrero Amparán”*
1. En este sentido, se concluye que al **SUJETO OBLIGADO** le compete generar, poseer y administrar información estadística relacionada con sistemas de seguridad pública, captadas en el territorio municipal; misma **información que es susceptible de ser publicada oficiosamente**.

### III.I. De las llamadas de emergencia a los números de atención municipal.

1. Por cuanto hace a las llamadas de emergencia y denuncias telefónicas, los artículos 111 y 111 Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecen lo siguiente:

*“****Artículo 111.-*** *La Federación, las entidades federativas y* ***los Municipios, realizarán los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de su red pública de telecomunicaciones local****, con el Sistema Nacional de Información, previsto en la presente Ley.*

***El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía****. La Secretaría adoptará las medidas necesarias para la operación e interconexión de estos servicios con el Sistema Nacional de Información, en los términos del artículo 109 Bis.*

***Artículo 111 Bis.-*** *El* ***Centro Nacional de Información regulará el Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia bajo el número único 911****, en coordinación con las entidades federativas. Para el funcionamiento de dicho Servicio deberá llevar a cabo las siguientes acciones:*

***I.*** *La estandarización y certificación de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia, de conformidad con la normatividad aplicable;*

***II.*** *El diseño, implementación y evaluación de los programas de capacitación, servicio de carrera y formación continua;*

***III.*** *El fomento a la cultura del buen uso del número único nacional de atención de llamadas de emergencia;*

***IV.*** *La unificación de otros números de emergencia;*

***V.*** *La coordinación con la Secretaría para la operación y funcionamiento del Servicio, y*

***VI.*** *Todas aquellas que sean necesarias para la consolidación del Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 911.”*

1. De lo anterior se advierte que la Federación, las Entidades y los Municipios deberán realizar acciones en conjunto para conseguir la compatibilidad total en los servicios de red pública en materia de telecomunicaciones, con el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública[[10]](#footnote-10).
2. Dicho lo anterior, el Bando Municipal 2023 de Almoloya de Juárez, en su artículo 114, señala que el Cuerpo de Seguridad Ciudadana Municipal tendrá, entre sus atribuciones, el **auxiliar y canalizar rápida, confiable y eficientemente las llamadas de emergencia** durante las 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año, a la población que así lo requiera.
3. Correlativo a lo anterior, la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México es de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio del Estado de México y tiene por objeto **establecer las bases de coordinación entre las instituciones de seguridad pública del Gobierno del Estado de México y de los municipios de la entidad**, en el uso y aprovechamiento de las **tecnologías de la información y comunicación** en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, y sus fines son[[11]](#footnote-11):
	1. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo de las instituciones de seguridad pública.
	2. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y la estabilidad en la convivencia, así como prevenir situaciones de emergencia o desastre e incrementar la seguridad pública.
	3. Regular el uso y resguardo de la información obtenida, a través de equipos y sistemas tecnológicos en las materias de seguridad pública y procuración de justicia.
	4. Regular las acciones de análisis de la información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos en materia de seguridad pública, para generar inteligencia en la prevención de la delincuencia e infracciones administrativas.
	5. Establecer las bases para la estandarización u homologación de los equipos y sistemas tecnológicos en materia de seguridad pública.
4. Al respecto, la Ley de mérito señala que el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad, regulará el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, así como los **Centros de Mando Regional y Municipal**, para el **manejo de la información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos**, los cuales estarán controlados, operados y sujetos de conformidad con lo establecido en las leyes aplicables[[12]](#footnote-12).
5. Con referencia a los **Centros de Mando Municipal** deberán estar en coordinación con la Secretaría de Seguridad, a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, por lo que su operación se regirá por las políticas y estándares que ésta establezca[[13]](#footnote-13).
6. Al respecto, el artículo 25 de la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México, establece que **las Instituciones de Seguridad Pública, implementarán** los **métodos** **de clasificación, procesamiento, validación, almacenamiento, resguardo y remisión de información**, que garantice la veracidad en los datos que reportan.
7. Cabe señalar que **las instituciones de seguridad pública deberán contar con un área para la consulta y seguimiento de las denuncias anónimas** de su competencia[[14]](#footnote-14); para lo cual, la infraestructura mínima para integrar el Sistema de Denuncia Anónima 089 se conformará de la forma siguiente[[15]](#footnote-15):
	1. Un conmutador que permita una comunicación automática, de acuerdo a las necesidades.
	2. Equipos de cómputo de operadores y supervisor.
	3. Medios de comunicación.
8. En seguimiento a lo anterior, el Reglamento de la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México, establece que los Centros de Mando Municipal tendrán, entre sus obligaciones[[16]](#footnote-16):
	1. Atender, canalizar y dar seguimiento a las llamadas que sean recibidas a través del Sistema de Atención a llamadas de Emergencia 066, de conformidad con el protocolo de atención que emita el Centro de Control.
	2. Atender, canalizar y dar seguimiento a los apoyos que sean requeridos por el Centro de Control o los Centros de Mando Regional de las llamadas recibidas por el Sistema de Atención a llamadas de Emergencia 066.
	3. Visualizar, atender y dar seguimiento a las denuncias que sean recibidas a través del Sistema de Denuncia Anónima 089, canalizadas por el Centro de Control y que correspondan a su ámbito territorial, hasta su total conclusión.
9. Así las cosas, el encargado del área del Sistema de Denuncia Anónima 089 será el responsable de vigilar permanentemente dicho aplicativo; turnar las denuncias anónimas a las áreas correspondientes; y, **dar seguimiento** a las denuncias anónimas e **informar al Centro de Control** sobre las acciones implementadas[[17]](#footnote-17).
10. Así las cosas, se tiene que el **Centro de Control captará y sistematizará las denuncias anónimas** y las canalizará a las instituciones o dependencias competentes, a través del aplicativo del Sistema de Denuncia Anónima 089, para su atención y seguimiento[[18]](#footnote-18). Por su parte, **las dependencias o instituciones deberán informar al Centro de Control** las acciones realizadas para el seguimiento de las denuncias anónimas del aplicativo del Sistema de Denuncia Anónima 089[[19]](#footnote-19).
11. Así las cosas, la respuesta proveída por el Director de Seguridad Ciudadana, a través del oficio número MAJ/DSCM/AVG/767/2023, resulta por demás deficiente, pues para este momento del estudio hemos establecido que, en materia de seguridad pública, existirán diversas bases de datos de información que nutrirán al Centro Nacional de Información de Seguridad Pública, siendo una de éstas la relacionada con llamadas y denuncias telefónicas.
12. En razón de lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** deberá poner a disposición de la particular el Acuerdo de su Comité de Transparencia, mediante el cual, se declare la **inexistencia** de la información. Por lo que es necesario traer a contexto lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su 169, fracción III, mismo que señala:

 “***Artículo 169.*** *Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:*

***I.*** *Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;*

***II.*** *Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;*

***III.*** *Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y*

***IV.*** *Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.*

*La Unidad de Transparencia deberá notificarlo al solicitante por escrito, en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.*

*Este plazo podrá ampliarse hasta por otros siete días hábiles, siempre que existan razones para ello, debiendo notificarse por escrito al solicitante.”*

1. Del precepto antes transcrito se advierte claramente que cuando la información no se encuentre en los archivos del **SUJETO OBLIGADO**, el Comité de Transparencia deberá ordenar que se genere la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
2. Luego entonces, resulta notorio que **la manifestación de inexistencia de información no consiste** meramente **en ratificar que ciertos documentos no se encuentran en un área administrativa determinada**, sino que **implica la alta responsabilidad del Comité de Transparencia de realizar todas las diligencias internas necesarias a efecto de asegurar de que se busque la información en todas las áreas y unidades administrativas del SUJETO OBLIGADO a fin de constatar que realmente la información no obra más en los archivos del ayuntamiento; y, en dado caso**, cuando exista la posibilidad, **ordenará su regeneración o reposición** inmediata; y, más importante aún, **notificará al Órgano de Control Interno para que se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa respectivo**.
3. En otras palabras, **hablar de información inexistente implica la alta responsabilidad de explicar a la ciudadanía por qué un ente público que tiene la facultad y el deber de generar, poseer o administrar su información pública, no la tiene**.
4. Aclarado lo anterior, previo a observar las formalidades que han de observarse en dicho acuerdo y, para mayor entendimiento sobre el concepto de *inexistencia* en materia de acceso a la información pública, es necesario señalar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió el criterio número 14-17, que es de la literalidad siguiente:

***“Criterio 14/17***

***INEXISTENCIA.*** *“La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada e implica que ésta****no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla****.”*

*Resoluciones:*·*RRA 4669/16. Instituto Nacional Electoral. 18 de enero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez.*·*RRA 0183/17. Nueva Alianza. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas.*·*RRA 4484/16. Instituto Nacional de Migración. 16 de febrero de 2017. Por mayoría de seis votos a favor y uno en contra de la Comisionada Areli Cano Guadiana. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos.”*

1. Además, como consecuencia de las disposiciones legales contenidas en la **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, es que existe el mandato expreso de que en caso de no existir la documentación que debió, por mandato de ley, generarse, administrarse o poseerse, es obligación de la autoridad emitir una declaratoria formal que debe reunir los requisitos señalados en la propia norma jurídica,[[20]](#footnote-20)según puede apreciarse a continuación:

***“Artículo 19.****Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.*

*En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.*

*(…)”*

1. Y por cuanto hace a la normatividad local debe aplicarse lo establecido en los *LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ACCESO, MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN, RECTIFICACIÓN O SUPRESIÓN PARCIAL O TOTAL DE DATOS PERSONALES, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, en su numeral CUARENTA Y CUATRO, así como, CUARENTA Y CINCO*, y el Criterio 0004-11 aprobado por el Pleno de este Órgano Garante, en la sesión ordinaria de veinticinco (25) de agosto de dos mil once, que demuestran claramente el concepto de inexistencia, y en qué circunstancias debe emitirse la declaratoria respectiva:

***CRITERIO 0004-11***

***INEXISTENCIA. DECLARATORIA DE LA. ALCANCES Y PROCEDIMIENTOS****. “De la interpretación de los artículos 29 y 30, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se concluye que cuando el Titular de la Unidad de Información no localice la documentación solicitada, a pesar de haber sido generada, poseída o administrada por el Sujeto Obligado, turnará la solicitud al Comité de Información el cual es el único competente para conocer y deliberar mediante resolución el dictamen de declaratoria de inexistencia, la cual tiene como propósito que el particular tenga la certeza jurídica de que el Sujeto Obligado realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información en los archivos a cargo. En consecuencia, es deber del Comité de Información instruir una búsqueda exhaustiva a todas y cada una de las áreas que integran orgánica o funcionalmente al Sujeto Obligado, para localizar los documentos que contengan la información materia de una solicitud, así como la de supervisar que esa búsqueda se lleve a cabo en todas y cada una de las áreas mencionadas. Dicha búsqueda exhaustiva implicará que el Comité acuerde las medidas pertinentes para la debida localización de la información requerida dentro de la estructura del Sujeto Obligado y, en general, el de adoptar cualquier otra previsión que considere conducente para tales efectos y velar por la certeza en el derecho de acceso a la información.*

*Bajo el entendido de que dicha búsqueda exhaustiva permitirá dos determinaciones:*

*1ª) Que se localice la documentación que contenga la información solicitada y de ser así la información pueda entregarse al solicitante en la forma en que se encuentra disponible, o*

*2ª) Que no se haya encontrado documento alguno que contenga la información requerida, por lo que agotadas las medidas necesarias de búsqueda de la información y de no encontrarla, el Comité de Información deba emitir el dictamen de declaratoria de inexistencia y notificarlo al interesado.*

*Aunado a lo anterior, en el dictamen de declaratoria de inexistencia el Comité de Información deberá motivar o precisar las razones por las que se buscó la información, las áreas en las que se instruyó la búsqueda, las respuestas otorgadas por los Servidores Públicos Habilitados y en general, todas aquéllas circunstancias que se tomaron en cuenta para llegar a determinar que la información requerida no obra en los archivos a cargo.”*

1. Bajo este tenor se debe destacar que para que se declare la inexistencia de la información, **debió haber existencia previa de la documentación** y la falta posterior de la misma en los archivos del **SUJETO OBLIGADO**, esto es que la información se generó, poseyó o administró en el marco de las atribuciones conferidas al **SUJETO OBLIGADO**, pero no la conserva por diversas razones (destrucción física, desaparición física, sustracción ilícita, baja documental, etcétera).
2. En consecuencia, el **SUJETO OBLIGADO,**en todo tiempo, debió cumplir con las formalidades exigidas por el marco jurídico, lo cual implica fundar y motivar su respuesta; por lo que deberá emitir un Acuerdo del Comité de Transparencia, que se hará del conocimiento de la particular; pero, en los siguientes términos:
	1. Deberá emitir el acuerdo de inexistencia respectivo, en el entendido, que el acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado.
	2. Señalará el lugar y fecha de la resolución, el nombre del solicitante, la información solicitada, el fundamento y motivo por el cual se determina que la información solicitada no obra en sus archivos, los nombres y firmas autógrafas de los integrantes del Comité de Información.
3. Lo anterior es así, toda vez que **es necesaria** la emisión del acuerdo de inexistencia en aquellos casos en que el **SUJETO OBLIGADO generó, administró o poseyó**la información solicitada empero previa búsqueda exhaustiva y minuciosa de la misma, no localiza la información requerida.
4. En ese caso, su Comité de Transparencia tiene el deber de emitir un Acuerdo de Inexistencia, el cual -se insiste-, se dicta en aquellos supuestos en los que si bien la información solicitada la genera, posee o administra el **SUJETO OBLIGADO** en el marco de las funciones de derecho público; sin embargo, éste no lo posee por la razones que se deben expresar **a través de un acuerdo debidamente fundado y motivado**esto en estricto apego a lo establecido en los artículos 169 y 170 de la Ley Estatal de Transparencia, situación que no ocurrió, por lo que, para dar cumplimiento a la resolución es necesario entregar el acuerdo emitido por el Comité de Transparencia mediante el cual se sustente la inexistencia de la información.

### III.II. De las bitácoras de servicios y parte de novedades.

1. Ahora bien, el artículo 6 de la Ley de Seguridad del Estado de México, establece que se entenderá por Instituciones de Seguridad Pública a todas aquellas Instituciones Policiales encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y **municipal**; como se transcribe:

*“****Artículo 6.-*** *Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:*

*(…)*

***XI. Instituciones Policiales****: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva y de centros de arraigos; y* ***en general todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal****, que realicen funciones similares;*

*(…)*

***XII. Instituciones de Seguridad Pública****: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y* ***dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y*** *municipal****;***

*(…)”*

1. En ese mismo orden de ideas, la Ley en comento, en su artículo 138 fracción IX, X y XI, otorga facultades a dichas Instituciones para dar cabal cumplimiento a sus funciones, dentro de las cuales se encuentra el **emitir informes, partes policiales y, entre otras, las siguientes:**

*“****Artículo 138.-*** *Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos* ***se coordinarán en los términos de esta Ley*** *y demás disposiciones aplicables,* ***para el efectivo cumplimiento de sus funciones****, y tendrán, entre otras, las facultades siguientes:*

*(…)*

***IX****. Proponer al ministerio público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;*

***X****. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación* ***deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al ministerio público****, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;*

***XI****.* ***Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma*** *que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;*

*(…)”*

(Énfasis añadido)

1. En esa tesitura, cabe señalar la distinción entre los **partes de novedades** y los **partes informativos** a que se hace referencia en el párrafo que antecede.

*“El* ***PARTE DE NOVEDADES*** *es la* ***presentación por escrito de los hechos relevantes del turno****.*

*El* ***PARTE INFORMATIVO*** *es la presentación por escrito de una* ***relación de los hechos involucrados en un hecho específico****, como un accidente, una detención o cualquier otra intervención del policía en el ejercicio de sus funciones. El parte informativo normalmente forma parte del inicio de una acción legal y es leído por personas que no estuvieron en el lugar de los hechos”*

(Énfasis añadido)

1. Con base en lo anterior, se colige que el **parte de novedades** es el documento que llena un policía, mediante el cual, reporta los hechos y/o acontecimientos relevantes que ocurrieron durante su turno; mientras que el **parte informativo** consiste en un documento que asienta las circunstancias de modo, tiempo y lugar de un hecho particular en el que tuvo intervención un policía.
2. Similar al **parte de novedades**, la **bitácora de servicio** consiste en el instrumento de control de funciones, vigente durante el desarrollo de los servicios, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre los diversos mandos operativos de la Dirección de Seguridad Pública, en el que deberán referirse por escrito los **asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de los servicios por turno**.
3. En algunos casos, la **bitácora de servicios** es utilizada como un documento que reporta hechos y novedades generadas durante el turno de personal a quien se le ha asignado un vehículo; por lo tanto, aparte del espacio destinado a la descripción de hechos, también contempla información relacionada con el vehículo asignado, como el kilometraje, cantidad de combustible, etc. A modo de ejemplo, se comparte el formato de la bitácora de servicios utilizada por la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal:



1. Como puede observarse, una **bitácora de servicios** identifica plenamente a un elemento policial no solo por su **nombre**, sino que también asienta el **sector o cuadrante** donde se encuentra asignado para realizar labores de protección y vigilancia y el **número del vehículo** que tiene asignado. Mientras que otras bitácoras de servicios detallan mayores elementos identificativos como los **horarios del turno**, **número de celular** asignado para comunicarse con el Centro de Mando, etc.
2. En consecuencia, los tres documentos, el parte informativo y de novedades, así como la bitácora de servicios, pueden contener **datos personales**, como lo son, el **nombre de particulares** (desde ciudadanos a quienes se les proveyó de cualquier tipo de ayuda u orientación, hasta víctimas y presuntos responsables de la comisión de delitos), o bien, **domicilios**; los cuales **corresponderían a datos personales susceptibles de clasificarse como confidencial**.
3. Dicho lo anterior, es necesario señalar que, por criterio mayoritario del Pleno de este Instituto, los documentos en cuestión consisten en información que, por su naturaleza, debe ser clasificada como reservada, pues su difusión se relaciona con la causal de clasificación contenida en el artículo 140, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; ya que puede causar daño u obstruir la **prevención o persecución de los delitos**, alterar el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la **conducción o los derechos del debido proceso** en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de **quejas**, **denuncias**, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la **seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias**, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
4. En consecuencia, el **SUJETO OBLIGADO** deberá atender los miramientos vertidos en el siguiente Considerando, a fin de emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia con el que se sustente la reserva de la información.

### III.III. De los Informes Policiales Homologados.

1. Por cuanto hace al Informe Policial Homologado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 43, establece el contenido que debe contener el documento de mérito como se muestra a continuación:

*“****Artículo 43.-*** *La Federación y las entidades federativas establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:*

***I.*** *El área que lo emite;*

***II.*** *El usuario capturista;*

***III.*** *Los Datos Generales de registro;*

***IV.*** *Motivo, que se clasifica en;*

***a)*** *Tipo de evento, y*

***b)*** *Subtipo de evento.*

***V.*** *La ubicación del evento y en su caso, los caminos;*

***VI.*** *La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos.*

***VII.*** *Entrevistas realizadas, y*

***VIII.*** *En caso de detenciones:*

***a)*** *Señalar los motivos de la detención;*

***b)*** *Descripción de la persona;*

***c)*** *El nombre del detenido y apodo, en su caso;*

***d)*** *Descripción de estado físico aparente;*

***e)*** *Objetos que le fueron encontrados;*

***f)*** *Autoridad a la que fue puesto a disposición, y*

***g)*** *Lugar en el que fue puesto a disposición.*

*El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.”*

1. Por su parte el Lineamiento Décimo Primero de los Lineamientos para el Llenado, Entrega, Recepción, Registro, Resguardo y Consulta del Informe Policial Homologado, dispone lo siguiente:

*“****DÉCIMO PRIMERO. LLENADO DEL IPH.***

*Los integrantes de las* ***instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno*** *deberán registrar en el IPH la información relacionada con las puestas a disposición de personas y/o de objetos derivados de su intervención.*

*El IPH para* ***hechos probablemente delictivos*** *contendrá al menos los siguientes datos:*

***I.*** *El Número de Referencia o el Número de folio asignado;*

***II.*** *Los datos del o los integrantes de la institución policial que lo emite;*

***III.*** *Los datos de la autoridad competente que lo recibe;*

***IV.*** *Los datos generales de la intervención o actuación;*

***V.*** *El motivo de la intervención o actuación;*

***VI.*** *La ubicación del o los lugares de la intervención o actuación;*

***VII.*** *La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos. Así como, justificar razonablemente el control provisional preventivo y/o los niveles de contacto;*

***VIII.*** *En caso de personas detenidas:*

***a)*** *El Número del Registro Nacional de Detenciones;*

***b)*** *Los motivos de la detención;*

***c)*** *Los datos generales de la persona;*

***d)*** *La descripción de la persona, incluyendo su estado físico aparente;*

***e)*** *Las armas de fuego y/o los objetos que le fueron recolectados y/o asegurados, y*

***f)*** *El lugar al que es puesta a disposición la persona;*

***IX.*** *En caso de lesionados y/o fallecidos, un informe del uso de la fuerza en el que se describa la conducta que lo motivó y el nivel proporcional empleado de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Éste será distinto al reporte pormenorizado señalado en el artículo 32 de la misma Ley;*

***X.*** *En caso de inspección de vehículo, los datos generales sobre sus características;*

***XI.*** *En caso de recolección y/o aseguramiento de armas de fuego u objetos, los datos generales sobre sus características y apariencias;*

***XII.*** *En caso de preservar el lugar de la intervención o actuación, los datos generales sobre su entrega-recepción, y*

***XIII.*** *En caso de entrevistas, los datos generales de la persona entrevistada y el relato de la misma.*

*El IPH para* ***infracciones administrativas*** *contendrá al menos los siguientes datos:*

***I.*** *El Número de Referencia o el Número de folio asignado;*

***II.*** *Los datos del o los integrantes de la institución policial que lo emite;*

***III.*** *Los datos de la autoridad competente que lo recibe;*

***IV.*** *Los datos generales de la intervención o actuación;*

***V.*** *El motivo de la intervención o actuación;*

***VI.*** *La ubicación del o los lugares de la intervención o actuación;*

***VII.*** *La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos. Así como, justificar razonablemente el control provisional preventivo y/o los niveles de contacto;*

***VIII.*** *En caso de personas arrestadas:*

***a)*** *El Número del Registro Nacional de Detenciones;*

***b)*** *Los motivos de la detención;*

***c)*** *Los datos generales de la persona;*

***d)*** *La descripción de la persona, incluyendo su estado físico aparente, y*

***e)*** *El lugar en el que es puesta a disposición la persona, y*

***IX.*** *En caso de involucramiento de vehículo, los datos generales sobre sus características.*

*En el llenado del IPH se anotará por completo la información del evento. En caso de no contar con algún dato, no se realice la actividad y/o no aplique su llenado, se deberá dejar constancia de ello, o testar o cancelar el espacio respectivo a fin de que no se haga un mal uso de él.*

*No se exigirá la totalidad del llenado y entrega de los Anexos cuando el caso no lo amerite.”*

1. Así las cosas, el Informe Policial Homologado se advierte como el máximo instrumento que tienen los cuerpos de seguridad pública para certificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo la detención de una persona, sea por la posible comisión de un delito o, por actos que supongan una infracción administrativa.
2. Con base en lo anterior, existe una diferenciación muy grande entre el parte de novedades e informativo, con el informe policial homologado; y es que éste último se genera únicamente cuando se suscite la detención de una persona o se reporten hechos relacionados con la comisión de un delito o una falta administrativa. En consecuencia, tocará ahora analizar la procedencia de la clasificación de la información.

### III.IV. De la Comisión de Honor y Justicia.

1. El artículo 55 de la Ley de Seguridad del Estado de México señala que, los municipios de la entidad establecerán un **Consejo Municipal de Seguridad Pública**, el cual deberá quedar instalado dentro de los primeros 30 días naturales del inicio de la administración municipal y enviar al Consejo Estatal el acta de instalación respectiva. Cada Consejo Municipal deberá sesionar en forma ordinaria cada dos meses y en forma extraordinaria las veces que sean necesarias, en términos que establezca el estatuto correspondiente que emita el Consejo Municipal.
2. Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el **Consejo Municipal de Seguridad Pública** deberá integrar las siguientes comisiones[[21]](#footnote-21):
	1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.
	2. Planeación y Evaluación.
	3. Estratégica de Seguridad.
	4. **Comisión de Honor y Justicia**.
	5. Las demás que determine.
3. Por cuanto hace a la **Comisión de Honor y Justicia**, ésta consiste en un órgano colegiado que tendrá como atribución llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, los procedimientos en los que se resuelva la suspensión temporal, separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los elementos policiales de conformidad con lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal y la Ley General, cuando incumplan[[22]](#footnote-22):
	1. Con los **requisitos de permanencia** que se establecen en la Ley General, la Ley de Seguridad del Estado de México y demás disposiciones legales aplicables;
	2. Con las **obligaciones** establecidas en la Ley General, la Ley de Seguridad del Estado de México y los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar; y
	3. Con el **régimen disciplinario** establecido en la Ley de Seguridad del Estado de México.
4. Las Instituciones Policiales establecerán una **Comisión de Honor y Justicia**, que estará integrada por:
	1. Un presidente que tendrá voto de calidad;
	2. Un secretario que será el titular del jurídico de la Institución y contará con voz y voto; y
	3. Un representante de la unidad operativa de investigación, prevención o reacción según sea el caso.
5. El procedimiento llevado ante la **Comisión de Honor y Justicia** dará inicio cuando un integrante de las instituciones de seguridad pública incumpla con alguno de los requisitos de permanencia, las obligaciones establecidas en la Ley General, la Ley de Seguridad del Estado de México y los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar o con el régimen disciplinario. A raíz del incumplimiento, la **Unidad de Asuntos Internos** integrará el expediente que sustente dicha irregularidad y lo remitirá a la brevedad a la Comisión[[23]](#footnote-23).
6. Cuando le sea remitido un expediente, la **Comisión de Honor y Justicia** abrirá un periodo de información previa, con la finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la conveniencia o no de tramitar el procedimiento administrativo correspondiente[[24]](#footnote-24).
7. De ser procedente, la **Comisión de Honor y Justicia**, iniciará procedimiento administrativo al elemento policial, asignándole al expediente correspondiente un número progresivo e incluirá el año que se inicia[[25]](#footnote-25).
8. Se otorgará al elemento policial, sujeto a procedimiento, **garantía de audiencia** a efecto de que conozca la irregularidad que se le imputa, ofrezca pruebas y alegue en su favor[[26]](#footnote-26). El procedimiento de garantía de audiencia se desahogará en los siguientes términos[[27]](#footnote-27):
	1. Dará a conocer al servidor público las constancias y pruebas que obran en el expediente del asunto, en su caso;
	2. Se admitirán y desahogarán las pruebas que se ofrezcan y que sean procedentes;
	3. El compareciente formulará los alegatos que considere pertinentes; y
	4. Se levantará acta administrativa en la que consten las circunstancias anteriores.
9. La **Comisión de Honor y Justicia** podrá celebrar, con los elementos policiales sujetos a procedimiento, convenios que pongan fin a los asuntos, siempre que no sean contrarios a las disposiciones legales aplicables[[28]](#footnote-28).
10. Cuando se impongan sanciones administrativas, la motivación de la resolución considerará las siguientes circunstancias[[29]](#footnote-29):
	1. La gravedad de la infracción en que se incurra;
	2. Los antecedentes del infractor;
	3. Las condiciones socio-económicas del infractor; y
	4. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, en su caso.

### IV. De la clasificación de la información realizada por el SUJETO OBLIGADO.

1. El artículo 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que la **clasificación** es el proceso mediante el cual el **SUJETO OBLIGADO** determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de **reserva** o **confidencialidad** contenidos en los artículos 140 o 143 de la Ley de mérito.
2. Aunado a lo anterior, la Ley de la materia establece que la clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que[[30]](#footnote-30):
	1. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
	2. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o
	3. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.
3. Por su parte, el tercer párrafo del artículo 122 de la Ley de mérito establece que **los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información**.
4. En ese tenor, conviene señalar que **en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación**, **el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión**; y, para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una **prueba de daño[[31]](#footnote-31)**.
5. Cabe destacar que, en la aplicación de la prueba de daño, el **SUJETO OBLIGADO** deberá precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, justificando que[[32]](#footnote-32):
	1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;
	2. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y
	3. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
6. Por su parte, el Lineamiento Trigésimo Tercero, fracción V, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, precisa que para motivar la clasificación también se deben acreditar las circunstancias de **tiempo**, **modo** y **lugar**.
7. Consecuencia de lo anterior, los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, como información clasificada[[33]](#footnote-33).
8. Al respecto, las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.
9. Por cuanto hace a la reserva de la información, el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que el acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como **reservada**, conforme a los criterios siguientes:

*“****I.*** *Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

***II.*** *Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

***III.*** *Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

***IV.*** *Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

***V.*** *Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:*

***1.*** *Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o*

***2.*** *La recaudación de las contribuciones.*

***VI.*** *Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

***VII.*** *La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

***VIII.*** *Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;*

***IX.*** *Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;*

***X.*** *El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;*

*Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y*

***XI.*** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.”*

1. Mientras que el artículo 143 de la Ley de mérito reconoce que se considerará a información **confidencial**, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:

*“****I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;*

***II.*** *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

***III.*** *La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.”*

1. Así las cosas, los Sujetos Obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia, sin ampliar las excepciones o supuestos de **reserva** o **confidencialidad** previstos en la Ley General y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, aduciendo analogía o mayoría de razón[[34]](#footnote-34).
2. Una vez establecido lo anterior, y como ha sido reiterado a lo largo del presente estudio, de las constancias que obran dentro del expediente digital formado en el SAIMEX, con motivo del recurso de revisión **2128/INFOEM/IP/RR/2023**, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** negó el acceso a la información relacionada con:
	1. Las denuncias anónimas, realizadas a lo números de emergencia municipal;
	2. Del ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés:
		1. Nombre de los policías que hicieron uso de la patrulla con número 093, así como sus bitácoras de servicio, parte de novedades e Informe Policial Homologado;
	3. Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión de Honor y Justicia, del uno (01) de enero de dos mil veintidós al catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés.
3. Ahora bien, de las constancias que obran dentro el expediente digital formado en el SAIMEX, se advierte que **el SUJETO OBLIGADO no entregó el Acuerdo del Comité de Transparencia, mediante el cual, se confirmara, modificara o revocara la clasificación de la información propuesta por las Direcciones de Seguridad Ciudadana Municipal, y Jurídica y Consultiva**, pues únicamente entregó las pruebas de daño presentadas por las áreas administrativas de mérito.
4. En consecuencia de lo anterior, **ninguna de las propuestas de clasificación tiene validez alguna** pues, como hemos visto en líneas previas, **sólo el Comité de Transparencia puede aprobar la restricción del derecho de acceso a la información pública** cuando se actualice alguna causal de reserva o confidencialidad previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
5. Sin embargo, debemos reiterar que dos áreas administrativas presentaron las propuestas de prueba de daño, a fin de justificar la necesidad de reservar, por un lado, la relación de denuncias anónimas realizadas a los números de emergencia e, información relacionada con elementos de seguridad que hicieron uso de una patrulla específica el ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés; y, por otro lado, las Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Honor y Justicia.
6. Así las cosas, a través del oficio número PM/DSCM/AVG/781/2023, de veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés, se tiene que el Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal realizó las siguientes manifestaciones:

*“Respecto de la Solicitud de mérito, es dable señalar que la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL, advierte que lo solicitado versa en información referente al rubro, por lo cual se someta a consideración del Comité la reserva de dicha información, en virtud de hacer pública dicha información podría ocasionar un perjuicio real y directo a interés público, además de poner riesgo de perjuicio que supondría la divulgación superar el interés público general de que se difunda; para lo cual, se presenta y aplica una* ***PRUEBA DE DAÑO****, entendiéndose por esta, la demostración de manera fundada y motivada, que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y que el menoscabo o daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla y por consiguiente, debe clasificarse como reservada, precisando las razones objetivas por la que la apertura de la información genera una afectación.*

***FUNDAMENTACIÓN:***

*(…)*

*Artículo 140. El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*VI. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

*(…)*

***“Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.***

***Artículo 113.*** *Como información reservada pordrá clasificarse aquella cuya publicación:*

*X. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*

*(…)*

*MOTIVACIÓN*

*La* ***DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL*** *del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que nos ocupa, solicita clasificar como reservada a la información relativa al contenido de la documentación generada por la misma, en el periodo comprendido a la fecha.*

***Sobre precisar en relación a las denuncias realizadas, llamadas anónimas, Bitácoras de servicio, Elementos de seguridad pública, partes de novedades relación a puestas a disposición del Ministerio Público e Informe Policial Homologado, toda vez que derivado a ello es de precisar que con fundamento en el artículo 140 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Pueda ocasionar causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; artículo 113 fracción X Afecte los derechos del debido proceso; de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.***

***De ahí, que el Estado deba garantizar y respetar las documentales que se emitan como reserva de información, es de precisar qué para lograrlo, dicha información si bien pudiera tenerse como pública, también lo es que al pertenecer a una institución policial o área de seguridad pública, la difusión de esta información, se obstruya la prevención y/o persecución de delitos, Se afirma lo anterior, en virtud de que no debe perderse de vista que existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad pública, a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que el artículo 113, fracción X, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que Afecté los derechos del debido proceso; Este artículo es correlativo con el artículo 140, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municpios.***

1. *Lo anterior, de conformidad con el artículo 113, fracción X de la ley general de Transparencia correlativo al artículo 140 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así mismo, con base en los dispuesto por los lineamientos vigésimo noveno, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, de los Lineamientos en materia de Clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.*
2. *De este modo, se acredita la existencia de elementos objetivos que permiten la clasificación de la información como reservada, en términos de la justificación expuesta por el área solicitante, y en este sentido, se aplica la prueba de daño, precisando las razones objetivas por las que la entrega de la información generaría una afectación de acuerdo con lo siguiente: La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público, toda vez que afectaría directamente a la* ***DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL****.*
3. *Riesgo de perjuicio que se pondría la divulgación de la información supera el interés público general de que se difunda, ya que afectaría la instrumentación de las actividades operativas en materia de seguridad pública. En este sentido, la publicación de la información afectaría y pondría en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona.*
4. *Acreditación del vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés público tutelado del que se trate: La divulgación de la información que forma parte de la prevención de delitos y combate a los delincuentes.*
5. *La divulgación representa un riego real, demostrable e identificable, en virtud de que al pertenecer a una institución policial o área de seguridad pública, pone en riesgo su vida, integridad o seguridad.*

*Riesgo real: La entrega de información, deban ser protegidos, con la finalidad de evitar la identificación de las personas al amparo de la protección y seguridad.*

*Riesgo demostrable: Luego entonces da a conocer información, el Estado debe garantizar y respetar sus derechos humanos como servidores públicos y como personas sujetas de derechos y obligaciones.*

*Riesgo identificable: Vulnera el interés, toda vez que son responsables de procurar el orden, la estabilidad y la defensa de la sociedad a la que pertenecen*

1. *Acreditación de modo, tiempo y lugar de daño: Atendiendo a la naturaleza de la información solicitada, se requiere su clasificación a fin de DAR A CONOCER LA RESERVA DE DICHA DOCUMENTAL.*

***Modo:*** *Afectación directa, riesgo real y afectación a la divulgación de la información.*

***Tiempo:*** *Del 14 de marzo del 2023 al 31 de diciembre del 2024.*

***Lugar de daño:*** *La afectación comprende el ámbito territorial en el cual tiene competencia el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.*

1. *Opinión de excepción al acceso a la información que menos los restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información: Este comité de Transparencia reserva en su totalidad la documentación generada por la* ***DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL*** *que formen parte de la información que contengan la documental descrita y demás solicitado que se encuentren en la Dirección de Seguridad ciudadana municipal.”* (Sic.)
2. De las líneas transcritas *supra*, podemos recuperar los siguientes elementos, con los cuales, el **SUJETO OBLIGADO**, pretendió justificar la reserva de la información:
	1. Que la información relacionada con las denuncias realizadas, llamadas anónimas, bitácoras de servicio, elementos de seguridad pública, partes de novedades, relación a puestas a disposición del Ministerio Público e Informe Policial Homologado, actualizaba la causal de reserva establecida en el artículo 140, fracción VI, de la Ley Estatal, y 113, fracción X, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
	2. Que el dar a conocer la información solicitada obstruiría la prevención y/o persecución de delitos, en virtud de que existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad pública, a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir la delincuencia en sus diferentes manifestaciones.
	3. Que la información debe ser protegida, a fin de evitar la identificación de personas al amparo de la protección y seguridad.
3. Así las cosas, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** fundó la necesidad de reservar la información con base en lo establecido en la fracción VI, del artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

 *(…)*

***VI.*** *Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

*(…)”*

(Énfasis añadido)

1. De lo anterior se colige que, para el **SUJETO OBLIGADO**, la información solicitada se relaciona con elementos que pueden ser de utilidad en la investigación de delitos y, que de difundirse, podrían afectar el debido proceso en procedimientos judiciales y/o administrativos, en tanto éstos no hayan quedado firmes; o, más aún, puede afectar la seguridad de particulares.
2. El problema principal que se detecta en la propuesta de clasificación de la Dirección de Seguridad Ciudadana consiste en que ésta **pretendió justificar la necesidad de reserva de toda la información como un todo, esto es, de forma general, sin analizar individualmente la naturaleza de cada documento solicitado**. Motivo por el cual no se advierte ninguna otra justificación para restringir el acceso más que lo solicitado se relaciona con actividades de seguridad pública.
3. Así las cosas, por cuanto hace a la relación de denuncias anónimas, registradas vía telefónica, esta Ponencia Resolutora reconoce que, dada su naturaleza, la información puede tener relación con la causal de reserva establecida en la fracción VI del artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
4. Al respecto, no es ocioso mencionar que las causales de reserva, reconocidas en el artículo 140 de la Ley Estatal, armonizan con las establecidas en el 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro de las que destaca la siguiente:

*“****Artículo 113.*** *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

*(…)*

***VII.*** *Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*

*(…)”*

1. Al respecto, los **Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas** (los Lineamientos), tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas[[35]](#footnote-35).
2. Así, por cuanto hace a la causal de reserva reconocida en la fracción VII del artículo 113 de la Ley General, el lineamiento vigésimo sexto de Los Lineamientos establece que, se podrá considerar como información reservada, aquella que **obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos**.
3. De tal modo que, a fin de que se verifique el supuesto de reserva de mérito, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos[[36]](#footnote-36):
	1. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;
	2. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso; y
	3. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.
4. Entonces, por cuanto hace al primer elemento, conviene remitirnos al Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo artículo 211, contempla que el procedimiento penal comprenderá tres etapas, a saber:

*“****Artículo 211. Etapas del procedimiento penal***

*El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:*

***I.*** *La de investigación, que comprende las siguientes fases:*

***a)******Investigación inicial****, que* ***comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente*** *y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e*

***b)*** *Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;*

***II.*** *La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y*

***III.*** *La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.*

*(…)”*

(Énfasis añadido)

1. De lo anterior se colige que la investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por **denuncia**, por **querella** o por su equivalente cuando la ley lo exija[[37]](#footnote-37). En ese sentido, el Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia[[38]](#footnote-38).
2. En los delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona –la denuncia-, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito[[39]](#footnote-39).
3. De tal manera que una denuncia telefónica se advierte como el inicio del proceso penal; lo cual, como hemos analizado en párrafos previos, el Centro de Mando Municipal, al recibir una denuncia telefónica, tiene la obligación de dirigirla al área competente para atender las manifestaciones que, en el caso concreto, sería la Dirección de Seguridad Ciudadana.
4. En segundo lugar, este organismo garante advierte que existe un vínculo directo entre la información solicitada y la carpeta de investigación o proceso penal que, en su caso, la denuncia hubiera iniciado; ya que, se insiste, la denuncia telefónica consiste en la *notitia criminis* que dio inicio a la labor de investigación por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana, en conjunto con la o el agente del Ministerio Público encargado de sustanciar la fase de investigación.
5. En el mismo sentido, se considera que el difundir las denuncias puede impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público, o su equivalente, durante la etapa de investigación o ante los Tribunales Judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal, ya que la etapa de investigación inicial se sustenta *prima facie* con las manifestaciones o hechos vertidos en la denuncia telefónica.
6. Por ello, resultaría imperativo el guardar un máximo principio de secrecía respecto de los hechos narrados en las denuncias, a fin de que el Ministerio Público, en coadyuvancia con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pueda recabar las pruebas vastas y suficientes en torno a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que presuntamente actualizan la comisión de un delito.
7. De tal manera que procederá la reserva de los documentos relativos a las denuncias anónimas realizadas vía telefónica, siempre y cuando los procedimientos que se hayan iniciado con motivo de éstas aún se encuentren en **trámite**; empero, de ser el caso de que las denuncias ciudadanas ya hubieran sido atendidas, procedería su entrega en versión pública, testando cualquier dato que pueda identificar o hacer identificable a los particulares denunciantes, y cualquier tercero en que en ellas se señale.
8. Por otro lado, en lo que concierne al nombre de los policías que ocuparon la patrulla con número 093 el ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés, este instituto advierte que otorgar acceso al nombre de policías operativos podría comprometer la integridad de los mismos, de conformidad con lo que establece el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios:

***“Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*(…)*

***IV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;***

 *(…)”*

1. En este contexto, este Pleno considera que dar a conocer los nombres de servidores públicos que realizan funciones en materia de seguridad, tal como es el caso de los policías, los vuelve identificables y posiblemente reconocibles para grupos delictivos; así, dicha información puede ser utilizada para **vulnerar la vida, seguridad o salud de dichos elementos, incluso la de sus familias o entorno social,** demás, de que aumenta el riesgo de que personas ajenas a los intereses institucionales e intenten realizar actos tendientes a inhibir o entrometerse en las funciones de los policías municipales, lo cual causaría una vulneración a la seguridad municipal.
2. Por lo tanto, el proporcionar el nombre de los elementos policiales operativos dentro de los recibos de nómina del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, o equivalente, pone en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de dichos servidores públicos, siendo obligación de la Institución protegerla en todo momento para salvaguarda de sus integrantes.
3. Lo anterior adquiere razón toda vez que la información solicitada hace identificable a los integrantes de seguridad pública, ya que permite que su identidad pueda determinarse de manera directa, pudiéndose ocasionar riesgos por la posible utilización y difusión de la información por grupos delictivos.
4. Así mismo, existe la posibilidad de que personas ajenas a la Institución la utilicen para sorprender a la ciudadanía y realicen extorsiones telefónicas al amparo de usurpar la identidad de algún servidor público encargado de la seguridad pública; o que integrantes de organizaciones criminales los contacten para presionar en entregar información, como por ejemplo, la relacionada con investigaciones, nombres de integrantes que participan en los operativos e incluso documentación emitida por el **SUJETO OBLIGADO**, colocando en inminente riesgo la vida de todos los integrantes, menoscabando así las actividades de prevención del delito y combate a la delincuencia.
5. Así como el artículo 6º Constitucional por un lado garantiza el derecho de acceso a la información, por otro lado, el derecho a la vida y la seguridad de las personas se encuentran protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 30. Bajo este contexto es necesario confrontar ambos derechos fundamentales, cuyo ejercicio en este caso particular es por lo que es necesaria la ponderación de ambos para que uno de ellos sea ejercido en la mayor medida posible.
6. El riesgo de perder la vida, la seguridad o la integridad se encuentra presente y es de mayor gravedad que la negativa de acceso a la información solicitada, la divulgación de la información, puede generar un daño desproporcionado o innecesario, lo cual debe evitarse en la medida de lo posible, frente a aquella que se solicita. Es de interés público y socialmente relevante la protección a la vida y seguridad de todas y cada una de las personas sobre cualquier otro derecho fundamental, por lo que se debe proteger a quienes trabajan y ayudan al logro de la seguridad pública.
7. En ese mismo contexto, resulta pertinente establecer que la Constitución Política de los Estados unidos mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de Derechos Humanos, establecen que el derecho a la vida y la seguridad personal son los bienes supremos tutelados por los gobiernos, esto quiere decir, que no existe derecho alguno por encima de la vida y la seguridad personal. El derecho al acceso a la información, tutelado en el artículo sexto de nuestra Carta Magna, no es absoluto per se, toda vez que su objetivo es facultar a las personas a tener acceso a la información que les permita conocer cómo funcionan los órganos de gobierno, como parte fundamental de todo Estado democrático; dicho derecho permite a las personas tener una participación activa en la toma de decisiones de los gobernantes y a su vez, funciona como un ejercicio de fiscalización para supervisar las actividades que realiza el Estado.
8. Por lo que, el derecho a la vida y seguridad nacional tiene una-primacía que el derecho al acceso a la información, por lo que el bien jurídico a salvaguardarse primordialmente, es la vida y la seguridad de los servidores públicos encargados de la seguridad pública.
9. Al respecto, cabe hacer mención que el artículo 81 fracción III de la Ley de Seguridad del Estado de México, establece lo siguiente:

*“****Artículo 81.-******Toda información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones de Seguridad Pública o de cualquier instancia del Sistema Estatal debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con las disposiciones aplicables. No obstante lo anterior, esta información se considerará reservada*** *en los casos siguientes:*

*(…)*

***III.******La relativa a servidores públicos miembros de las instituciones de seguridad pública, cuya revelación pueda poner en riesgo su vida e integridad física con motivo de sus funciones;***

*(…)”*

(Énfasis añadido)

1. Argumento que se fortalece con lo estipulado en el criterio número 6-09, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, antes (INAI)**,** el cual refiere:

***NOMBRES DE SERVIDORES PÚBLICOS DEDICADOS A ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD, POR EXCEPCIÓN PUEDEN CONSIDERARSE INFORMACIÓN RESERVADA. “****De conformidad con el artículo 7, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* ***el nombre de los servidores públicos es información de naturaleza pública. No obstante lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que existan excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley****. En este sentido, se debe señalar que existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en* ***el artículo 13, fracción I de la ley de referencia se establece que podrá clasificarse aquella información cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional y pública****. En este orden de ideas, una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha situación,* ***por lo que la reserva de la relación de los nombres y las funciones que desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de seguridad nacional o pública****, puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes” (Sic)*

(Énfasis añadido).

1. Lo anterior bajo el entendimiento que, los documentos solicitados, consisten en información estadística relacionada con la incidencia delictiva que ocurre en el municipio; misma que ya establecimos previamente que tiene una naturaleza pública, aún y cuando se traten temas de seguridad pública.
2. Por otro lado, por cuanto hace a la relación de puestas a disposición del Ministerio Público, así como el Informe Policial Homologado, son documentos que sí pueden tener relación con la causal de reserva establecida en la fracción VI del artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
3. Dicho lo anterior, dada la naturaleza de la información, conviene remitirnos nuevamente a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; esta vez, a la causal de reserva que se transcribe a continuación:

*“****Artículo 113.*** *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

 *(…)*

***X.*** *Afecte los derechos del debido proceso;*

*(…)”*

1. Así, por cuanto hace a la causal de reserva considerada en el artículo 140, fracción VI, de la Ley Estatal, y 113, fracción X, de la Ley General, el Lineamiento vigésimo noveno de los Lineamientos establece lo siguiente:

*“****Vigésimo noveno.*** *De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos:*

***I.*** *La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;*

***II.*** *Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;*

***III.*** *Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y*

***IV.*** *Que con su divulgación se menoscaben los derechos del debido proceso.”*

(Énfasis añadido)

1. De esta manera, el lineamiento vigésimo noveno establece que, a fin de justificar la necesidad de reservar cierta información con base en el artículo 113, fracción X, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública –o 140, fracción VI, de la Ley Estatal-, se deberán cumplir cuatro elementos. El primero, exige que exista un procedimiento judicial en trámite; el segundo, que el **SUJETO OBLIGADO** sea parte en éste; el tercero, que la información no sea conocida por la contraparte previo a su presentación en el propio proceso; y, por último, que con su divulgación se menoscaben los derechos del debido proceso.
2. Así las cosas, por cuando hace al primer elemento, es necesario aclarar que ambos documentos, el Informe Policial Homologado y la relación de puestas a disposición del Ministerio Público, generadas el ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés, convergen en que los policías, tripulantes de la patrulla con número 093, realizaron al menos **una detención**.
3. Como hemos analizado previamente, el Informe Policial Homologado es el máximo instrumento judicial, a nivel nacional, con el que los cuerpos de seguridad pública pueden certificar o narrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que se detuvo a una persona por la posible comisión de un delito y que, una vez detenido, se tiene que presentar ante el Ministerio Público competente para que sea éste quien determine la situación jurídica de la persona detenida.
4. Luego, una relación de puestas a disposición del Ministerio Público es un documento que conglomera, a modo de reporte, todas las detenciones que se realizaron durante el día, el motivo de la detención y ante qué Ministerio Público se presentaron.
5. Dicho esto, se considera que se acredita el primer elemento contenido en el lineamiento vigésimo noveno, ya que la puesta a disposición ante el Ministerio Público es justamente la acción que activa la actividad jurisdiccional que apertura un procedimiento en contra del detenido y, obliga al Ministerio Público a presentarlo ante el Juez de Control, siempre y cuando considere que existen los suficientes elementos de hecho y derecho para formular una imputación en su contra.
6. Por cuanto hace al segundo elemento, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** funge como parte acusadora, de la mano del Ministerio Público, pues será el o los policías que realizaron la detención quienes tengan que declarar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los orillaron a detener a la persona que ahora se le imputa la comisión de un delito.
7. Por cuanto hace al tercer elemento, resulta imposible conocer si la información es o no conocida por la contraparte (en este caso, el detenido) previo a su presentación en el proceso. Más aún porque en nuestro país existe la figura de la **prisión preventiva oficiosa**, la cual consiste en un mecanismo –por demás polémico- en el que, básicamente, el Juez determina que un imputado se mantenga en prisión mientras que el Ministerio Público continúa realizando labores de investigación para perfeccionar la imputación contra la persona; todo esto sin antes recibir una sentencia que involucre la pena privativa de la libertad.
8. De acuerdo con el *World Prison Brief*, que complica el Instituto de Investigación de Políticas Penales en el Reino Unido, hasta el dos mil dieciocho, casi el 40% de los 204,442 reos en México estaban privados de su libertad por prisión preventiva.
9. Por lo tanto, al considerar una estadística tan alarmante –y preocupante- puede llevarnos a suponer que, a pesar de que ya haya pasado más de un año de que se llevara a cabo la detención en el Municipio de Almoloya de Juárez, existe la posibilidad de que la contraparte (el o los detenidos) aún no hayan tenido acceso a ciertas pruebas aportadas por el Ministerio Público, como puede ser el Informe Policial Homologado.
10. Finalmente, por cuanto hace al cuarto elemento para acreditar la procedencia de reserva, que implica que con su divulgación se menoscaben los derechos del debido proceso, este Organismo Garante advierte que, al consistir el informe policial homologado en una prueba esencial que acredita las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó una detención, su publicidad sí puede afectar los derechos del debido proceso, pues consiste en documentos que suponen una prueba elemental con la que el Ministerio Público sustenta la imputación y, que sólo las partes en el juicio pueden tener acceso.
11. En consecuencia de lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** deberá clasificar en su totalidad el Informe Policial Homologado solicitado por el particular; no así la relación de puestas a disposición ante el Ministerio Público en turno, ya que, se reitera, su contenido se relaciona con la estadística delictiva, lo cual supone un interés público alto.
12. Empero, el **SUJETO OBLIGADO** deberá clasificar el nombre del o los policías que aparezcan en estos documentos, así como el nombre de los detenidos, y cualquier tercero involucrado), teléfonos, domicilios y cualquier dato que los pueda identificar o hacer identificables.
13. Finalmente, en lo que corresponde a las Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión de Honor y Justicia, a través del oficio número PM/SJYC/TPFV/207/2023, la Directora Jurídica y Consultiva y Secretaria de la Comisión de Honor y Justicia refirió lo siguiente:

*“Respecto de la Solicitud de mérito, es dable señalar que la COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, advierte que lo solicitado se someta a consideración del Comité la reserva de dicha información, en virtud de hacer pública dicha información podría ocasionar un perjuicio real y directo a interés público, además de ´poner riesgo de perjuicio que supondría la divulgación superar el interés público general de que se difunda; para lo cual, se presenta y aplica una* ***PRUEBA DE DAÑO*** *(…).*

***FUNDAMENTACIÓN:***

*(…)*

***Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

***VI.*** *Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

*(…)*

***“Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.***

***Artículo 113.*** *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

*I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuinio y un efecto demostrable:*

*X. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*

*(…)*

*MOTIVACIÓN*

*La COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que nos ocupa, solicita clasificar como reservada a la información relativa al contenido de la documentación generada por la misma, en el periodo comprendido a la fecha.*

***Sobre precisar de la información requerida y derivado a ello es precisar que dicha información, con fundamento en el artículo 140 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;***

***De ahí, que el Estado deba garantizar respetar, como persona sujeta de derechos y obligaciones, el de precisar qué dicha información si bien pudiera entenderse como pública, también lo es que, al pertenecer a una institución policial o área de seguridad pública; la difusión de esta información, pone en riesgo el mal uso que se le pueda dar. Se afirma lo anterior, en virtud de que no debe perderse de vista que existen funciones tendientes a garantizar de manera directa la seguridad pública, a través de acciones encaminadas a la reserva de esta en sus diferentes manifestaciones (…)***

1. *Lo anterior, de conformidad con el artículo 113, fracciones I, VII y VIII de la ley general de Transparencia correlativo al artículo 140 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así mismo, con base en los dispuesto por los lineamientos décimo octavo y vigésimo sexto, de los Lineamientos en materia de Clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.*
2. *De este modo, se acredita la existencia de elementos objetivos que permiten la clasificación de la información como reservada, en términos de la justificación expuesta por el área solicitante, y en este sentido, se aplica la prueba de daño, precisando las razones objetivas por las que la entrega de la información generaría una afectación de acuerdo con lo siguiente: La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público, toda vez que afectaría directamente a la* ***COMSIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO****.*
3. *Riesgo de perjuicio que se pondría la divulgación de la información supera el interés público general de que se difunda, ya que afectaría la instrumentación de los procedimientos iniciados a Elementos de Seguridad. En este sentido, la publicación de la información afectaría y pondría en riesgo la información y seguridad de la COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO.*
4. *Acreditación del vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés público tutelado del que se trate: La divulgación de la información que forma parte de Procedimientos Iniciados a los Elementos de Seguridad de Almoloya de Juárez, México.*
5. *La divulgación representa un riego real, demostrable e identificable, en virtud de que al pertenecer a una institución policial o área de seguridad pública, pone en riesgo su vida, integridad o seguridad.*

***Riesgo real:*** *La entrega de información, deban ser protegidos, con la finalidad de evitar la identificación de las personas al amparo de la protección y seguridad.*

***Riesgo demostrable:*** *Luego entonces da a conocer información, el Estado debe garantizar y respetar sus derechos humanos como servidores públicos y como personas sujetas de derechos y obligaciones.*

***Riesgo identificable:*** *Vulnera el interés, toda vez que son responsables de procurar el orden, la estabilidad y la defensa de la sociedad a la que pertenecen*

1. *Acreditación de modo, tiempo y lugar de daño: Atendiendo a la naturaleza de la información solicitada, se requiere su clasificación a fin de DAR A CONOCER LA INFORMACIÓN SOLICITADA.*

***Modo:*** *Afectación directa, el mal uso de la información solicitada.*

***Tiempo:*** *Plazo de un año a cinco años, 14/03/2023 – 14/12/2023.*

***Lugar de daño:*** *La afectación comprende el ámbito territorial en el cual tiene competencia el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.*

1. *Opinión de excepción al acceso a la información que menos los restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información: Este comité de Transparencia reserva en su totalidad la documentación generada por la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CUIDADANA MUNICIPAL que formen parte de la información que contengan LA INFORMACIÓN”* (Sic.)
2. De lo anterior se advierte que la Directora Jurídica y Consultiva y Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Honor y Justicia determinó necesaria la reserva de las Actas de las Sesiones del Comité con base en lo siguiente:
	1. La información solicitada se relaciona con procedimientos iniciados a Elementos de Seguridad.
	2. Con base en lo anterior, son aplicables las causales de reserva contempladas en el artículo 140, fracción VI, de la Ley Estatal y 113, fracciones I y VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. Dicho lo anterior, no se advierte cómo es que la difusión de información relacionada con los procedimientos llevados a cabo en contra de elementos de seguridad pública pueda comprometer la seguridad pública o nacional; o bien, que se obstruya la prevención o persecución de delitos, pues como hemos visto en el punto III de este estudio, el procedimiento llevado a cabo ante la Comisión de Honor y Justicia es un mecanismo de responsabilidad materialmente administrativo, en el cual no tiene injerencia el Ministerio Público.
4. Dicho lo anterior, se procederá a analizar la idoneidad de la reserva con base en lo establecido en la fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que establece:

*“****Artículo 113.*** *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

*(…)*

***XI.******Vulnere la conducción*** *de los Expedientes judiciales o* ***de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio****, en tanto no hayan causado estado;*

*(…)”*

(Énfasis añadido)

1. Así las cosas, la naturaleza de lo solicitado se relaciona con la conducción de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio; sobre lo cual, el lineamiento trigésimo de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, señala lo siguiente:

*“****Trigésimo.*** *De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:*

***I.*** *La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite;*

***II.*** *Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, y*

***III.*** *Que su difusión afecte o interrumpa la libertad de decisión de las autoridades dentro del juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.*

*Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:*

***1.*** *Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y*

***2.*** *Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.*

*No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.”*

1. Así, el lineamiento trigésimo considera que, para que se actualice la causal de reserva establecida en el artículo 114, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán actualizarse tres elementos: que exista un procedimiento administrativo en **trámite**; que la información se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento; y, que su difusión pueda afectar o interrumpir la libertad de decisión de las autoridades del juicio o procedimiento.
2. En primer lugar, debemos recordar que la Directora Jurídica y Consultiva y Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Honor y Justicia señaló que justamente, dentro de las Actas de la Comisión, se dirimen los procedimientos llevados a cabo en contra de elementos de seguridad pública como, por ejemplo, la garantía de audiencia, el desahogo de pruebas y la deliberación.
3. Correlativo a lo anterior, se actualiza el segundo elemento, pues en las Actas se asientan las constancias, diligencias y actuaciones propias de los procedimientos que se lleven a cabo.
4. Por otro lado, por cuanto hace a que su difusión pueda afectar o interrumpir la libertad de decisión de las autoridades dentro del juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, resulta en extremo difícil tasar la forma que la difusión de ciertas deliberaciones puedan afectar las decisiones de los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia.
5. No obstante, para este escenario, se privilegiará el principio de presunción de inocencia en favor de los elementos de seguridad. Por lo tanto, mientras las Actas traten de asuntos en trámite, sería procedente su reserva.
6. Por lo antes expuesto, las Actas solicitadas deberán ser clasificadas con sustento de dos aristas: que los procedimientos puedan encontrarse en trámite; y, que a pesar de ya haber causado estado, el nombre de policías es sujeto a reserva para proteger su vida e integridad personal.
7. No obstante, el **SUJETO OBLIGADO** deberá ser cuidadoso en el ejercicio de reserva, pues deberá considerar que puede existir información que, **bajo ninguna circunstancia puede ser clasificada**, y es cuando esta se trate de actos de corrupción o violaciones graves a derechos humanos.
8. Al respecto, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, define de forma clara y concreta cada uno de los actos considerados como faltas administrativas graves de los servidores públicos en sus artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67; y, cuya ejecución se relacionan, en su mayoría, con el abuso del poder público encomendado en un empleo, cargo o comisión, buscando la obtención de un beneficio meramente personal en agravio del Estado, los ciudadanos u otros servidores públicos.
9. Lo separa, en consecuencia, a los actos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas Estatal de todos los demás, ya que éstos se pueden determinar como **actos de corrupción**.
10. En ese sentido, debemos traer a estudio lo dispuesto por el numeral 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que se inserta a continuación:

*“****Artículo 142.******Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando:***

***I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos****, calificada así por autoridad competente;*

***II.******Se trate de la investigación de posibles violaciones graves de derechos humanos aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente****, cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos la trascendencia social de las violaciones;*

***III.*** *Se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los tratados ratificados por el Senado de la República, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones jurídicas aplicables; y*

***IV. Se trate de información relacionada con actos de corrupción*** *de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.”*

(Énfasis añadido)

1. Así las cosas, la Ley de la materia reconoce a toda la información relacionada con violaciones a derechos humanos y actos de corrupción como información inmune a recibir un tratamiento de clasificación como reservada, en el margen de que, justamente, el hacer del conocimiento a la ciudadanía este tipo de conductas manifestadas por servidores públicos, atiende el objetivo fundamental de la normatividad: el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la gestión pública para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.
2. Correlativo a lo anterior, el Código Penal Federal, tipifica de manera específica cuáles son los delitos por hechos de corrupción en su Título Décimo, varios de los cuales se relacionan con las faltas administrativas graves contenidas en el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
3. Luego entonces, **la autoridad quien, en primera instancia, clasificaría la conducta sobre la cual se integra un expediente de investigación como una posible falta administrativa grave sería la propia Comisión de Honor y Justicia**, pues luego de revisar las conductas atribuibles al elemento de seguridad, aquélla podría identificar las faltas administrativas graves que correspondan con lo que determina la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios como **actos de corrupción.**
4. En ese orden de ideas, cobra relevancia señalar que México ha participado, firmado y ratificado tres convenciones internacionales de combate a la corrupción, a saber: la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA 1997), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE 1999) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU 2004). Al respecto, la Convención Interamericana contra la Corrupción señala que *la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos*; asimismo, considera que *el combate a la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social*.
5. En específico, en el artículo VI de dicha Convención se señalan las siguientes conductas como actos de corrupción: **a.** El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; **b.** El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; **c.** La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; **d.** El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los referidos; y, **e.** La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de determinados actos. De igual manera, México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que se instituye que los principios de transparencia e integridad se centran en cuatro ámbitos principales:
	1. Creación de un marco eficaz y justo para la apertura y el acceso.
	2. Mejora de la transparencia.
	3. Fomento de una cultura de integridad.
	4. Mecanismos de ejecución, cumplimiento y revisión eficaces.
6. Para la actualización de estos principios, se prevé que los responsables del Estado pueden utilizar todas las opciones normativas y políticas disponibles para seleccionar medidas, directrices o normas que satisfagan las expectativas públicas de transparencia e integridad. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1/18 “CORRUPCION Y DERECHOS HUMANOS” sostiene que el objetivo de toda política pública para combatir la corrupción debe estar enfocado y ser implementado a la luz de los siguientes principios: el papel central de la víctima, la universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad; interdependencia y la interrelación entre los derechos humanos; la no discriminación y la igualdad; la perspectiva de género e interseccionalidad; la participación e inclusión; la rendición de cuentas; el respeto al estado de derecho y el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados. Asimismo, en dicha resolución se destacó que la misma era una primera aproximación integral de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la corrupción, por lo que se destacarán algunos ejes fundamentales y se formularon algunas recomendaciones para abordar el fenómeno desde el enfoque de derechos humanos, por lo que, en el apartado de “*Transparencia, acceso a la información y libertad de expresión*”, resolvió y emitió las siguientes recomendaciones:
	1. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido la relación estrecha y fundamental existente entre el derecho a la libertad de expresión y la democracia, reconocido como una “piedra angular” de toda sociedad democrática. El artículo 13 de la Convención Americana protege especialmente la búsqueda y difusión de información relativa a la corrupción por su importancia para la consolidación, funcionamiento y preservación de los sistemas democráticos; y
	2. El derecho de acceso a la información pública y el principio de la transparencia de la gestión estatal, protegido por el artículo 13 de la Convención, han sido reconocidos como unas de las principales herramientas en la lucha contra la corrupción. En la región, de acuerdo con lo establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en sus informes anuales, 23 países de las Américas ya cuentan con marcos normativos e instituciones que garantizan el acceso a la información pública. La mayor parte de los países de la región se encuentran admitidos en la iniciativa para el gobierno abierto (Open Goverment Partnership) y han adherido a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que promueve la apertura del gobierno, la transparencia en todos los niveles estatales y políticas públicas y la participación ciudadana. Sin perjuicio de los avances alcanzados, aún persisten desafíos para la implementación efectiva de las obligaciones de transparencia activa y pasiva que deben observar los gobiernos, lo que podría tener un impacto en el combate contra la corrupción.
7. Con base en lo anterior, y a efecto de abordar este eje fundamental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió las siguientes recomendaciones a los Estados:
	1. Fortalecer sus capacidades para garantizar de manera proactiva el acceso a información pública, clave para la lucha contra la corrupción; y fortalecer sus mecanismos de transparencia activa y rendición de cuentas respecto a los gastos e inversiones en infraestructura, la financiación de las campañas electorales, la transparencia en el funcionamiento de los partidos políticos.
	2. Continuar promulgando leyes que permitan el acceso efectivo a la información pública, en especial para aquellas personas o grupos de personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo, de conformidad con los estándares internacionales y propiciar su implementación efectiva y eficiente. Fortalecer los órganos de supervisión con garantías de autonomía e independencia; capacitar a los funcionarios y formar a la ciudadanía en aras de erradicar la cultura del secretismo y con la finalidad de otorgar a las personas las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública y la lucha contra la corrupción.
	3. Establecer obligaciones de transparencia activa de aquella información necesaria para la efectiva rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, en particular, en relación con:
		1. Los sistemas de convocatoria, contratación, empleo y salarios de funcionarios públicos;
		2. Los mecanismos para prevenir conflictos de interés;
		3. La contratación pública y la gestión del presupuesto público y de las inversiones de infraestructura;
		4. Las actividades de lobby;
		5. La identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado; y
		6. El financiamiento de las campañas electorales y el funcionamiento de los partidos políticos.
	4. Recopilar, producir, analizar y difundir periódicamente datos estadísticos e información sobre las denuncias de corrupción que reciben los distintos organismos de control y supervisión, el poder judicial, y otros mecanismos estatales de prevención e investigación de la corrupción, así como sus resultados.
	5. Promover un ambiente con garantías para la libertad de denunciar actos de corrupción, el desarrollo del periodismo investigativo y el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información relativa a corrupción. Esto incluye garantizar la seguridad de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas que investigan y denuncian corrupción, derogar leyes de desacato y difamación criminal y garantizar la proporcionalidad de sanciones civiles, asegurar la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas; y establecer sistemas de protección de denunciantes de corrupción.
8. De las recomendaciones transcritas, se reconoce que el acceso a la información y la transparencia son las principales herramientas en la lucha contra la corrupción, destacando que, se deben fortalecer los mecanismos de transparencia activa y rendición de cuentas, respecto de los gastos e inversiones en infraestructura, así como el establecimiento de transparencia activa de aquella información necesaria para la efectiva rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, en particular, en relación con: **a)** los sistemas de convocatoria, contratación, empleo y salarios de funcionarios públicos, **b)** los mecanismos para prevenir conflictos de interés, **c)** la contratación pública y la gestión del presupuesto público y de las inversiones de infraestructura, **d)** las actividades de lobby, **e)** la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado; **f)** el financiamiento de las campañas electorales y el funcionamiento de los partidos políticos.
9. Por último, resalta la recomendación, en el sentido de recopilar, producir, analizar y difundir periódicamente datos estadísticos e información sobre las denuncias de corrupción que reciben los distintos organismos de control y supervisión, el poder judicial, y otros mecanismos estatales de prevención e investigación de la corrupción, así como sus resultados, ya que permite resaltar la importancia de rendir cuentas respecto a las investigaciones sobre hechos que presumiblemente constituyen conductas vinculadas con actos de corrupción. Tomando en cuenta lo anterior, y conforme a la definición de servidor público que establece tanto el artículo 108 de nuestra Constitución, como el artículo 212 del Código Penal Federal reformado, se consideran actos de corrupción, la acción u omisión que llevé a cabo una persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en las instituciones gubernamentales, así como por particulares con funciones públicas, en la cual, en pleno ejercicio de sus funciones, obtenga un beneficio o una ventaja de cualquier naturaleza para sí o un tercero sobre algún hecho que no sea permisible en las normas vigentes, o bien, incurra en una conducta catalogada por la Ley como acto de corrupción. Dichos actos están tipificados bajo diversas figuras, las cuales se ubican en el Libro Segundo, Titulo Décimo del Código Penal Federal denominado, precisamente, “*Delitos por hechos de corrupción*”.
10. Con base en lo anterior, es claro que los actos que se investigan, en sí mismos, de acuerdo con la normatividad citada, pueden llegar a configurarse como **actos de corrupción**. En función de lo expuesto, y considerando que las conductas en comento son presuntamente actos de corrupción, es que el derecho de acceso a la información cobra una relevancia trascendental para la sociedad en general, ya que a través del ejercicio de éste se puede conocer información relacionada con casos en los que se investiga a servidores públicos, entre otros, que presuntamente realizaron actos apartados de la legalidad. Cabe añadir, que el derecho de acceso a la información tiene una dimensión individual y colectiva, donde la segunda, de conformidad con la tesis con rubro “DERECHO A LA INFORMACIÓN. DIMENSIÓN INDIVIDUAL Y DIMENSIÓN COLECTIVA”, constituye el pilar esencial sobre el cual se erige todo Estado democrático, así como la condición fundamental para el progreso social e individual. En ese sentido, no sólo permite y garantiza la difusión de información e ideas que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas e indiferentes, sino también aquellas que pueden llegar a criticar o perturbar al Estado o a ciertos individuos, fomentando el ejercicio de la tolerancia y permitiendo la creación de un verdadero pluralismo social, en tanto que privilegia la transparencia, la buena gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales en un sistema participativo, sin las cuales no podrían funcionar las sociedades modernas y democráticas.
11. En tales circunstancias, de identificarse expedientes formados por la posible comisión de **faltas administrativas graves** relacionados con **violaciones graves de derechos humanos** o **actos de corrupción**, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y el artículo 53 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el **SUJETO OBLIGADO** deberá hacer entrega de éstas al no ser sujetos de clasificación, a excepción del nombre de testigos o terceros ajenos a la comisión de la o las faltas administrativas graves.
12. Razón de lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** deberá entregar las Actas de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de la Comisión de Honor Justicia relacionadas con responsabilidades administrativas graves, a pesar de que éstas aún no hayan recibido una sentencia, **sin testar el nombre del o los elementos de seguridad presuntamente responsables**, atendiendo lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Claro está que, de ser el caso que los documentos donde consten las actuaciones respectivas contengan datos personales de terceros, tales como el nombre del o los particulares que presentaron la denuncia respectiva, se deberá realizar la versión pública **únicamente** de estos datos, mas no de ninguno que individualice al presunto servidor público responsable.
13. No es ocioso mencionar que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, perteneciente al Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, en su artículo 248, establece que la **Comisión de Honor y Justicia** es un órgano colegiado, con plena autonomía en sus resoluciones para el adecuado cumplimiento y desarrollo de sus atribuciones, y que tiene por objeto vigilar la honorabilidad y buena reputación de los integrantes; combatir la comisión de conductas lesivas en agravio de la sociedad o de las instituciones de gobierno.
14. Por ende y, como hemos analizado a lo largo del estudio de fondo del asunto, la **Comisión de Honor y Justicia** conocerá y resolverá todo asunto relativo al régimen disciplinario, del procedimiento y las sanciones que de ello derive, bajo los principios establecidos en la Constitución, la Ley General y el propio Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del **SUJETO OBLIGADO**, con apego a los derechos humanos[[40]](#footnote-40).
15. Cabe referir que los cargos de los integrantes de la **Comisión de Honor y Justicia**, así como los de sus suplentes, serán de carácter honorífico, por lo que no recibirán remuneración o compensación adicional por el desempeño de sus funciones[[41]](#footnote-41).
16. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 254 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal del **SUJETO OBLIGADO**, enlista y reconoce las atribuciones con las que contará la **Comisión de Honor y Justicia**, a saber:

*“****Artículo 254.-*** *La Comisión de Honor tendrá las siguientes atribuciones:*

***I.*** *Conocer y resolver en el ámbito de su competencia, respecto de las faltas disciplinarias en que incurran los integrantes de la Carrera Policial, por la inobservancia a los principios de actuación y deberes contemplados en la Ley, el presente Reglamento y en las demás disposiciones legales aplicables, e imponer en su caso, la sanción que corresponda;*

***II.*** *Preservar en todo momento la garantía de audiencia, en los procedimientos que instruya esta instancia colegiada;*

***III.*** *Establecer los lineamientos necesarios para la aplicación de procedimientos en materia de régimen disciplinario;*

***IV.*** *Notificar el citatorio al probable infractor, emplazándolo a la audiencia procesal;*

***V.*** *Llevar a cabo la audiencia procesal, que incluye declaración del probable infractor, etapa de pruebas y etapa de alegatos;*

***VI.*** *Dictar la resolución debidamente fundada y motivada que corresponda;*

***VII.*** *Constituirse en audiencia pública o privada, según sea la naturaleza del asunto y la gravedad de este, el día y hora señalados para tal efecto, ponderando siempre el interés colectivo. Se procederá a declararla abierta y serán llamados por el presidente las personas sujetas a procedimiento, sus defensores, y demás personas que por disposición de la normatividad aplicable deban intervenir en el procedimiento;*

***VIII.*** *Vigilar que se cumplan las resoluciones y los acuerdos emitidos; así como las resoluciones emanadas de las autoridades competentes en esta materia;*

***IX.*** *Cuestionar a la persona sujeta a procedimiento; solicitar informes u otros elementos de prueba, por conducto del Secretario Técnico, previa autorización del presidente, con la finalidad de allegarse de datos necesarios para el esclarecimiento del asunto y sustentar una resolución justa;*

***X.*** *Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de su competencia;*

***XI.*** *Sesionar para llevar a cabo sus funciones en el proceso de evaluación del desempeño.*

***XII.*** *Revisar los expedientes del personal que no apruebe la evaluación del desempeño.*

***XIII.*** *Ordenar la reposición del procedimiento de evaluación, cuando sea procedente.*

***XIV.*** *Notificar el resultado de la evaluación del desempeño a los elementos cuando ésta no sea aprobatoria.*

***XV.*** *Instaurar los procedimientos administrativos correspondientes en los casos en que los policías no hayan aprobado la evaluación del desempeño.*

***XVI.*** *Revisar e implementar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones respecto de expedientes con resultados aprobatorios que contengan alguna inconsistencia y/o irregularidad que amerite seguimiento.*

***XVII.*** *Aplicar, en el ámbito de su competencia, las evaluaciones del desempeño, debiendo designar para tales efectos a uno o varios representantes;*

***XVIII.*** *Las demás que sean necesarias para el mejor desempeño de sus funciones.”*

1. De esta manera, podemos concluir que la actividad principal de la **Comisión de Honor y Justicia** será el de recibir, sustancias y resolver los procedimientos relacionados con el régimen disciplinario de los elementos de seguridad como, por ejemplo, el notificar citatorios de inicio del procedimiento disciplinario; realizar audiencias públicas o privadas; analizar las pruebas que se presenten; aplicar evaluaciones de desempeño; etc.
2. Sin embargo, se advierte que la **Comisión de Honor y Justicia** también tendrá, entre sus atribuciones, el atender asuntos generales, ajenos a los procedimientos del régimen disciplinario, como el celebrar su formal instalación; así como establecer sus lineamientos para la aplicación de procedimientos, etc.
3. Luego entonces, de existir Actas del **Comité de Honor y Justicia** que no traten asuntos relacionados con el régimen disciplinario de los cuerpos de seguridad pública, éstos deberán ser entregados al **RECURRENTE**, al no relacionarse con la causal de reserva contemplada en la fracción VI del artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.
4. En conclusión, este Organismo Garante concluye conforme a derecho el **modificar** la respuesta proveída a la solicitud de información **00046/ALMOJU/IP/2023** a fin de ordenar la entrega, en versión pública, de los documentos donde consten las denuncias anónimas realizadas a los números de emergencia municipal, todo esto del ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés, así como las Actas de Sesiones de la Comisión de Honor y Justicia en procedimientos que hayan causado estado.

## **QUINTO. De la versión pública.**

1. Debe destacarse que, debido a la naturaleza de la información solicitada, eventualmente pudieran obrar datos personales susceptibles de protegerse, y toda vez que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México tiene el deber de velar por la protección de los datos personales aun tratándose de servidores públicos y en su caso generar la versión pública de los documentos por las consideraciones que se estimen pertinentes.
2. La clasificación total o parcial de la información requerida, mediante solicitud de acceso a la información pública, constituye una restricción al derecho humano de acceso a la información. Actualmente, el grave problema que enfrentamos son los Acuerdos de Clasificación de la Información que emiten los **SUJETOS OBLIGADOS**, ya que no observan los requisitos que deben de llevar a cabo para la realización de la clasificación de la información, tanto por la complejidad del procedimiento como por la falta de atención de los operadores jurídicos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Requisitos previos. | Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia. Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados. |
| b) Supuestos de clasificación. | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.El **SUJETO OBLIGADO** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación. | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto. Es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación.  | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los **Sujetos Obligados**, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación. De lo anterior, se desprende que para una correcta **clasificación total o parcial**, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.Ahora bien, **para cada caso además de fundar y motivar**, se debe identificar con claridad que datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial.  | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular. En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección. Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

## **SEXTO. Decisión.**

1. Por lo tanto, en consecuencia y en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el **RECURRENTE** dentro del recurso de revisión **02128/INFOEM/IP/RR/2023**; por ello, y con fundamento en la fracción III del numeral 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **MODIFICA** la respuesta a la solicitud de información número **00046/ALMOJU/IP/2023**.
2. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Resultan fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **02128/INFOEM/IP/RR/2023** en términos de los **Considerandos** **CUARTO** y **QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICA** la respuesta emitida por el **Ayuntamiento de Almoloya de Juárez** a la solicitud **00046/ALMOJU/IP/2023** y se **ORDENA** entregar, en versión pública, a través del Sistema de Acceso a la Información Pública Mexiquense (SAIMEX), los documentos donde conste la siguiente información:

1. **El Acuerdo del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada referente a las llamadas de emergencia realizadas a los números de emergencia municipal, el ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés;**
2. **De las denuncias anónimas, realizadas a los números de emergencia municipal, registradas el ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés:**
	1. **Acuerdo del Comité de Transparencia, que confirme la clasificación de la información relacionada con procedimientos en trámite, conforme a la causal de reserva establecida en la fracción VI del artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y**
	2. **Denuncias anónimas atendidas, o que hayan causado estado, vigentes al catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés.**
3. **Total de puestas a disposición del Ministerio Público en turno el ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés.**
4. **Acuerdo del Comité de Transparencia que clasifique, como información reservada, el nombre de los elementos de seguridad pública que viajaban en la patrulla identificada con el número 093, el ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés, así como la bitácora de servicios, parte de novedades e Informes Policiales Homologados que se hayan generado durante el turno; y**
5. **De las Actas de Sesiones, Ordinarias y Extraordinarias, de la Comisión de Honor y Justicia, del uno (01) de enero de dos mil veintidós al catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés:**
	1. **Actas relacionadas con la atención de asuntos generales, o instalación de la Comisión, que no actualicen la causal de reserva establecida en el artículo 140, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.**
	2. **El Acuerdo de su Comité de Transparencia, que las clasifique como información reservada, en términos de los artículos 128, 129, 135 y 140, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Con la excepción de que la o las faltas administrativas de que se traten se relacionen con actos de corrupción o violaciones graves a derechos humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley en la Materia; en cuyo caso procederá su acceso en versión pública, acompañada del Acuerdo de Clasificación respectivo.**

Para la entrega en versión pública deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen y se ponga a disposición del **RECURRENTE**.

**TERCERO.** **Notifíquese vía SAIMEX,** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de **diez días hábiles**, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** **Notifíquese al RECURRENTE** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

**QUINTO.** Se hace del conocimiento del **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y en lo dispuesto en los artículo 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de que considere que la resolución le causa algún perjuicio podrá impugnarla vía recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; o bien, vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA EMITIENDO VOTO PARTICULAR; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA EMITIENDO VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EN LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351. [↑](#footnote-ref-1)
2. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350. [↑](#footnote-ref-2)
3. *“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

*(…)*

***II.*** *La clasificación de la información;*

***III.*** *La declaración de inexistencia de la información;*

*(…)”* [↑](#footnote-ref-3)
4. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, fracción I. [↑](#footnote-ref-5)
6. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibídem. Parr. 87. [↑](#footnote-ref-7)
8. Artículo 21, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibídem. [↑](#footnote-ref-9)
10. De acuerdo con el artículo 5, fracción XVII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el **Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública**, constituye el conjunto integrado, organizado y sistematizado de las Bases de Datos. Está integrado por elementos metodológicos y procedimentales que permiten a las Instituciones de Seguridad Pública su consulta e interconexión para el desempeño de sus funciones. [↑](#footnote-ref-10)
11. Artículo 1, Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México [↑](#footnote-ref-11)
12. Artículo 18, Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibídem. [↑](#footnote-ref-13)
14. Artículo 100, Reglamento de la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México. [↑](#footnote-ref-14)
15. Artículo 97, Ídem. [↑](#footnote-ref-15)
16. Artículo 28, Ídem. [↑](#footnote-ref-16)
17. Artículo 101, Reglamento de la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México. [↑](#footnote-ref-17)
18. Artículo 102, Ídem. [↑](#footnote-ref-18)
19. Artículo 103, Ídem. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lo anterior es incluso un requerimiento del sistema interamericano de protección a los derechos humanos. *Ibídem*. Párr. 113. [↑](#footnote-ref-20)
21. Artículo 55, Ley de Seguridad del Estado de México. [↑](#footnote-ref-21)
22. Artículo 160, Ídem. [↑](#footnote-ref-22)
23. Artículo 163, Ley de Seguridad del Estado de México. [↑](#footnote-ref-23)
24. Artículo 164, Ídem. [↑](#footnote-ref-24)
25. Artículo 166, Ley de Seguridad del Estado de México. [↑](#footnote-ref-25)
26. Artículo 167, Ídem. [↑](#footnote-ref-26)
27. Artículo 170, Ídem. [↑](#footnote-ref-27)
28. Artículo 176, Ídem. [↑](#footnote-ref-28)
29. Artículo 178, Ley de Seguridad del Estado de México. [↑](#footnote-ref-29)
30. Artículo 132, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-30)
31. Artículo 128, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-31)
32. Artículo 129, Ídem. [↑](#footnote-ref-32)
33. Artículo 134, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-33)
34. Artículo 130, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-34)
35. Lineamiento primero. Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. [↑](#footnote-ref-35)
36. Lineamiento vigésimo sexto, Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas [↑](#footnote-ref-36)
37. Artículo 221, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibídem. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibídem. [↑](#footnote-ref-39)
40. Artículo 248, Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, perteneciente al Ayuntamiento de Almoloya de Juárez. [↑](#footnote-ref-40)
41. Artículo 251, Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, perteneciente al Ayuntamiento de Almoloya de Juárez. [↑](#footnote-ref-41)